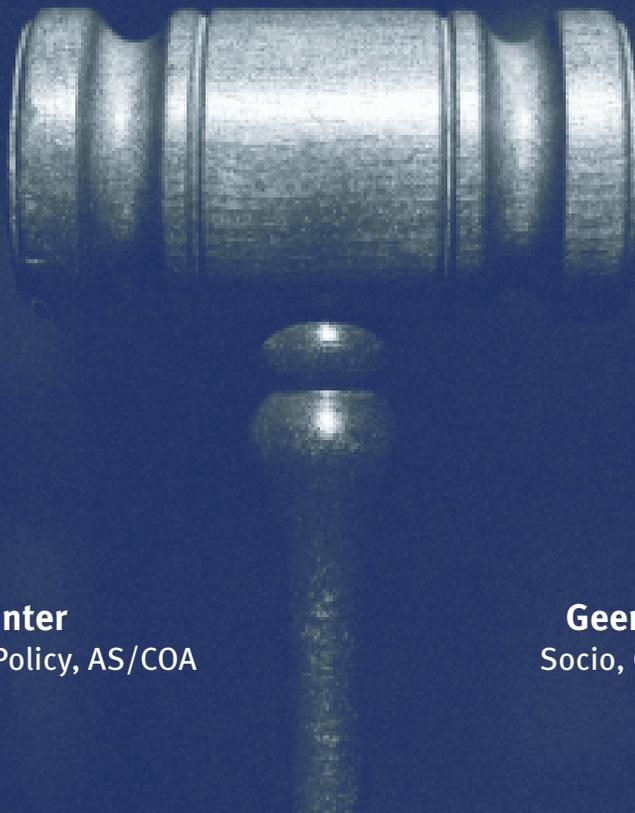


El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)

Evaluando la capacidad de América Latina para detectar,
castigar y prevenir la corrupción

2021



Brian Winter
Vicepresidente de Policy, AS/COA

Geert Aalbers
Socio, Control Risks

QUIÉNES SOMOS



Americas Society/Council of the Americas es el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en las Américas. Su misión es fomentar el entendimiento de los asuntos contemporáneos políticos, sociales y económicos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá. Las conclusiones de este reporte no necesariamente reflejan los puntos de vista de AS/COA y sus miembros.



Control Risks es una empresa global de consultoría especializada en riesgos que ayuda a construir organizaciones seguras, en regla y resilientes en una época de riesgos cambiantes y conectividad. Nuestros expertos, repartidos en 36 oficinas, ayudan a nuestros clientes a investigar irregularidades y resolver crisis, y proporcionan la visión estratégica y la inteligencia necesaria para que las empresas puedan aprovechar oportunidades y crecer.

Tabla de Contenidos

02 Introducción

04 Visualización de Datos

04 Puntajes Generales

05 Comparación a 2020 y 2019

05 Mapas de Color por Categoría

06 Resultados por Categoría

07 Reportes País

07 Uruguay

09 Chile

11 Costa Rica

13 Perú

15 Argentina

17 Brasil

19 Colombia

21 Ecuador

23 Panamá

25 República Dominicana

27 México

29 Paraguay

31 Guatemala

33 Bolivia

35 Venezuela

37 Metodología

41 Apéndice de Datos

junio de 2021



El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021

Evaluando la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción

La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores. Continuó la ampliamente documentada erosión de las instituciones democráticas en algunos países, y hubo una preocupante disminución de la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todos los países. Los errores y abusos denunciados y percibidos que cometieron varios fiscales y jueces de alto nivel en los últimos años también han contribuido a que disminuya el apoyo popular al movimiento anticorrupción que surgió en gran parte de América Latina a mediados de la década de 2010.

La tragedia de todo esto es evidente: los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca antes. América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes. Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado. Mientras los gobiernos realizan cuantiosos gastos de emergencia para ayudar a los más vulnerables, la reducción de la vigilancia ha contribuido a la opacidad en las adquisiciones públicas y al gasto excesivo en equipos de protección, respiradores y otros suministros médicos. Los informes sobre la falsificación de mascarillas y vacunas han deteriorado aún más la confianza de la población y han retrasado la vuelta a la normalidad. Mientras tanto, las crecientes dudas sobre la implementación del Estado de derecho y sobre la calidad de las instituciones judiciales han socavado la confianza de las empresas en un momento en que a lo largo de América Latina tanto la inversión extranjera como la nacional se encuentran en los niveles más bajos de los últimos años.

Sin embargo, hubo notables excepciones a estas desafiantes tendencias, sobre todo en países como Uruguay, Chile y Costa Rica, donde la calidad general de la democracia y la fortaleza de las instituciones políticas siguen siendo altas. Los proyectos de leyes anticorrupción avanzan lentamente en las legislaturas de Chile y Colombia. En la

República Dominicana se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción. En Panamá y Ecuador se han producido mejoras considerables en cuanto a la independencia de sus jefes de ministerios públicos y a su capacidad para hacer frente a los delitos de cuello blanco. En toda la región, varios países mejoraron los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero e implementaron instrumentos de adquisición más transparentes.

UN INSTRUMENTO BASADO EN DATOS

En este contexto, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks publican la tercera edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Publicado por primera vez en 2019, el índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.

El Índice CCC examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado. Por segundo año consecutivo, el índice abarca 15 países, que en conjunto representan casi el 95% del PIB de América Latina.

El país con mayor puntuación en el Índice CCC 2021 es Uruguay (7.80 sobre 10). Uruguay es seguido por Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16), Brasil (5.07), Colombia (4.81), Ecuador (4.77), Panamá (4.55), República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y Venezuela (1.40).

ENTRE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES ESTÁN:

- Uruguay obtuvo la puntuación más alta del índice por segundo año consecutivo.
- Cinco de los 15 países evaluados experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones, lo cual refleja el deterioro del contexto general detallado anteriormente. En siete países, las puntuaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios. Tres países experimentaron mejoras considerables.
- Los dos mayores países y economías de América Latina, Brasil y México, experimentaron algunos de los descensos más pronunciados.
- La República Dominicana fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación.

El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar —mediante datos y una metodología sólida— las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse.

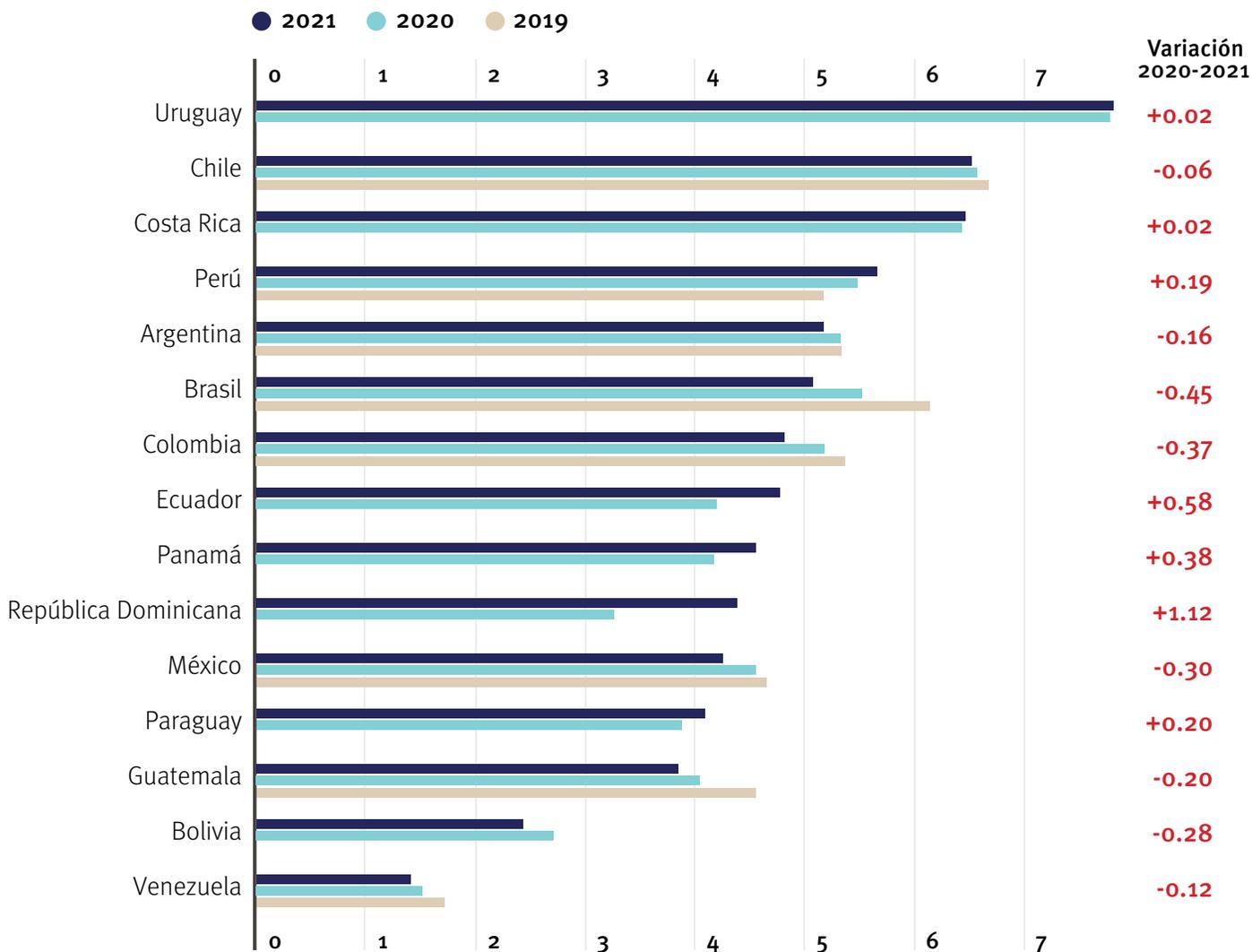
Puntaje General



Ranking

1	Uruguay	7.80
2	Chile	6.51
3	Costa Rica	6.45
4	Perú	5.66
5	Argentina	5.16
6	Brasil	5.07
7	Colombia	4.81
8	Ecuador	4.77
9	Panamá	4.55
10	República Dominicana	4.38
11	México	4.25
12	Paraguay	4.08
13	Guatemala	3.84
14	Bolivia	2.43
15	Venezuela	1.40

Puntajes Generales



Capacidad Legal



Democracia e Instituciones Políticas

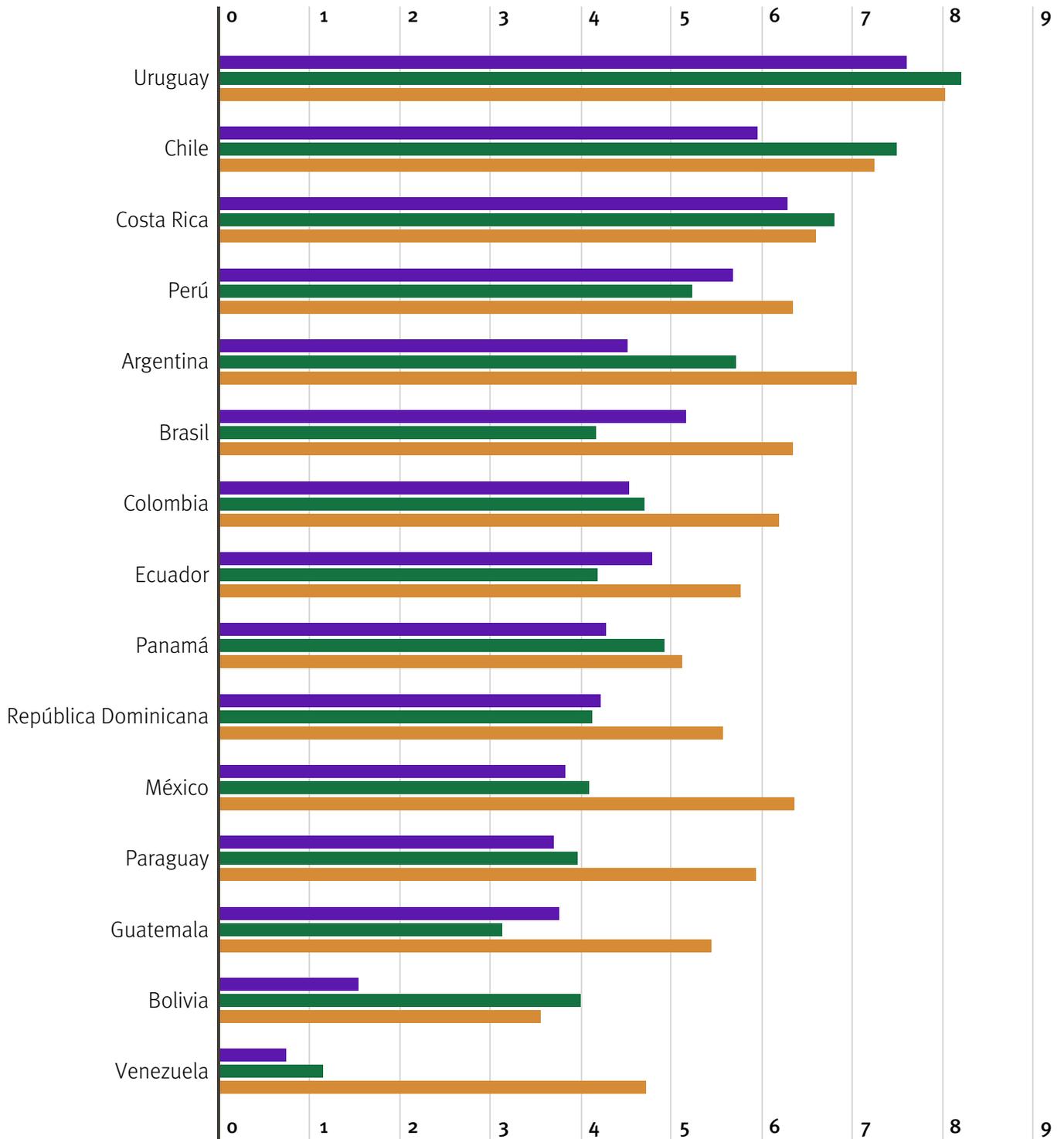


Sociedad Civil y Medios de Comunicación



Resultados por Categoría

- Capacidad Legal
- Democracia e Instituciones Políticas
- Sociedad Civil y Medios de Comunicación





URUGUAY

1
RANKING

7.80

Puntaje General 2021

7.78

Puntaje General 2020

n/a

Puntaje General 2019

7.59 Capacidad Legal

8.19 Democracia e Instituciones Políticas

8.02 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría

Capacidad Legal

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción

Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno

Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación

Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de delación premiada

Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

Democracia e Instituciones Políticas

Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas

Procesos legislativos y de gobierno

Calidad general de la democracia

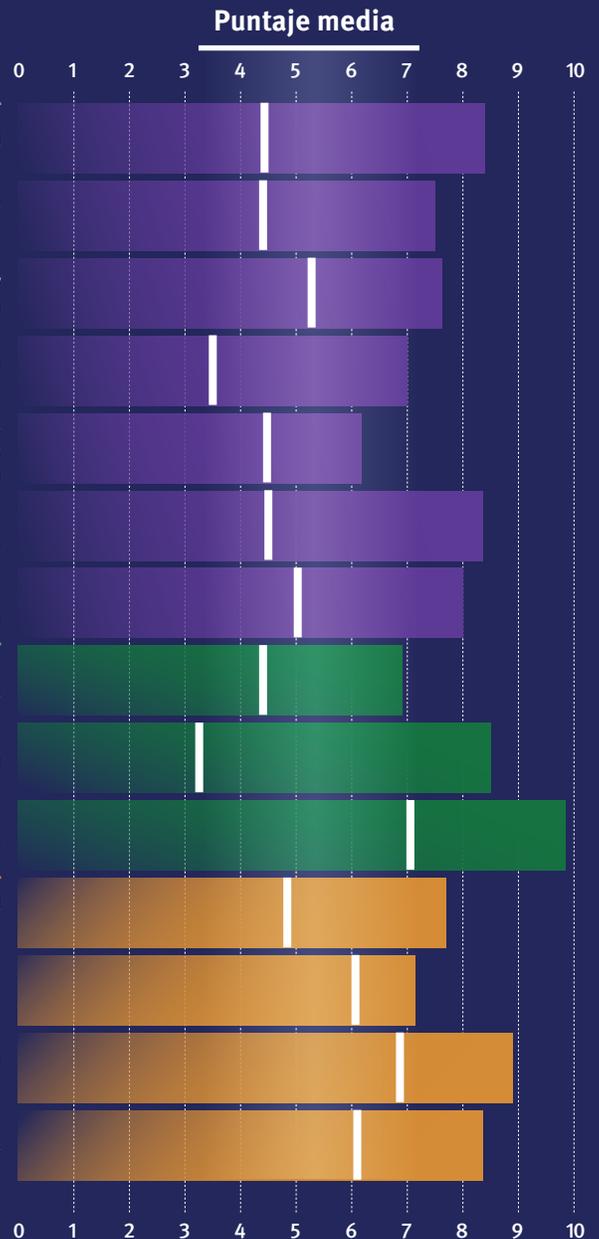
Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras en la educación

Calidad de la prensa y del periodismo de investigación

Comunicaciones digitales y redes sociales





URUGUAY

.....

Uruguguay lidera el Índice CCC por segundo año consecutivo, calificando encima de todos los países a través de las tres categorías. Chile ocupa un cercano segundo lugar en las categorías de sociedad civil y medios de comunicación y de capacidad legal. La puntuación global de Uruguay se vio efectivamente inalterada desde 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19 y del cambio de gobierno. Tras 14 años de administraciones de centro-izquierda, el presidente de centro-derecha Luis Lacalle Pou asumió su mandato en marzo de 2020.

En la categoría de capacidad legal, Uruguay supera a Costa Rica, que ocupa el segundo lugar, por 1,3 puntos. Esto refleja altos niveles de independencia judicial, cooperación internacional y la independencia de sus instituciones anticorrupción. En la categoría de la democracia e instituciones políticas, Uruguay mantuvo su liderazgo regional en variables como la legislación sobre la financiación de las campañas, los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad general de la democracia. Un incremento del 7% en la variable de comunicaciones digitales y redes sociales contribuyó a una ligera mejora en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación.

Las políticas antilavado de dinero siguen siendo un desafío para Uruguay: la variable que mide la capacidad de Uruguay para combatir los delitos de cuello blanco cayó un 5% desde 2020. A pesar de las importantes mejoras introducidas en los últimos años, los organismos de control internacionales han destacado la necesidad de que Uruguay avance en materia de lucha contra el lavado de dinero. Uruguay ha seguido colaborando con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la implementación de reformas económicas que pueden conducir a mejoras en esta área.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP, el principal organismo anticorrupción de Uruguay) se ha enfrentado a restricciones presupuestarias durante el último año, tras las medidas de austeridad del gobierno de Lacalle Pou, las cuales probablemente continuarán en 2021. Las considerables reducciones de los recursos y del personal de la JUTEP podrían provocar contratiempos en las investigaciones en curso y en las que se realicen en el futuro.

El Presidente Lacalle Pou ha trabajado activamente para atraer la inversión extranjera, incluyendo en el sector financiero. Se han simplificado algunos procedimientos fiscales, lo cual, unido a la disminución de las restricciones sobre las transacciones en efectivo, puede hacer más compleja la lucha contra el lavado de dinero.

El Congreso está debatiendo una nueva ley de financiación de campañas. Aunque algunas mejoras en la transparencia están en el radar, un posible aumento de la financiación pública podría crear desafíos en materia de rendición de cuentas para los partidos políticos.



CHILE

2
RANKING

6.51

Puntaje General 2021

6.57

Puntaje General 2020

6.66

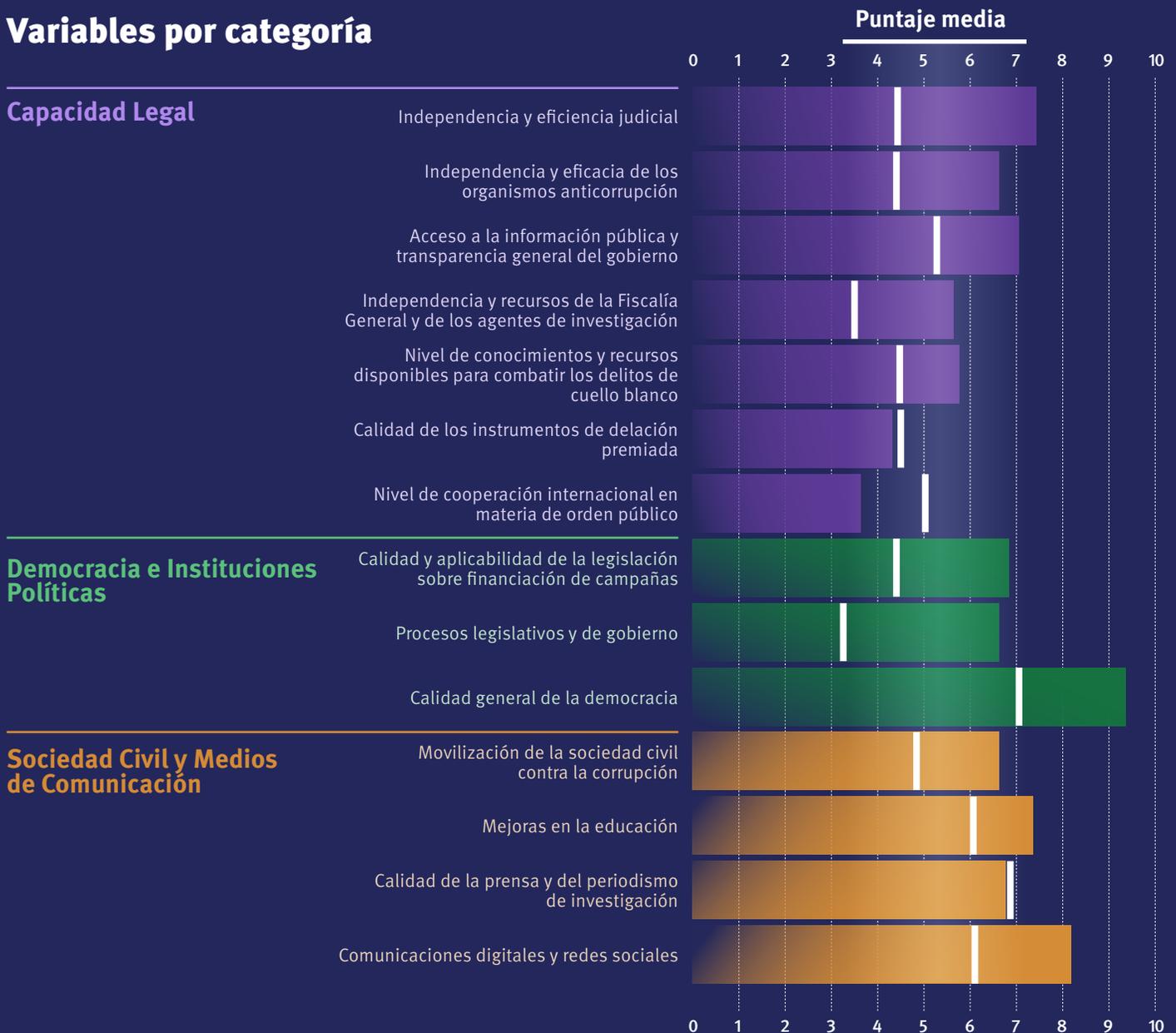
Puntaje General 2019

5.94 Capacidad Legal

7.49 Democracia e Instituciones Políticas

7.24 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





2

RANKING

CHILE

A pesar de un leve descenso en su puntuación global, Chile mantuvo su segunda posición en el Índice CCC. La capacidad de Chile para combatir la corrupción se mantuvo estable incluso tras el estallido social de finales de 2019 y las tensiones políticas asociadas a la pandemia a lo largo del año 2020.

Desde el año pasado, Chile ha tomado medidas para reforzar el entorno de anticorrupción. El Senado está debatiendo un proyecto de ley para proteger a los informantes que denuncien casos de corrupción. En un caso histórico, el ex senador Jaime Orpis fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de fraude y de recibir sobornos para favorecer los intereses de la mayor empresa pesquera de Chile, Corpesca, que fue multada. Los políticos locales también están bajo escrutinio: hay una investigación sobre el candidato presidencial y actual alcalde Daniel Jadue por una acusación de corrupción relacionada con donaciones a su municipalidad en Santiago.

Chile ha mantenido su fortaleza institucional, como lo demuestra su constante desempeño en la categoría de democracia e instituciones políticas. Las variables del país en esta categoría superan ampliamente la media regional y se sitúan muy cerca del líder del Índice, Uruguay. Dentro de la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, Chile registró un aumento del 21% en la variable que mide el uso de las comunicaciones digitales y de las redes sociales. Sin embargo, la movilización social contra la corrupción se redujo en un 13%, lo que refleja los confinamientos relacionados con la pandemia, así como un cambio de enfoque que se aleja de la corrupción hacia temas como la desigualdad, la reforma de las pensiones y la nueva Constitución.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

A mediados de 2021, Chile iniciará un proceso muy complejo para redactar una nueva Constitución, que podría incluir nuevas normas que afronten la corrupción. Los miembros de la asamblea constituyente de todo el espectro político probablemente apoyarían las medidas para mejorar la transparencia y aumentar el acceso a la información pública.

Los proyectos de ley contra la corrupción seguirán avanzando lentamente en el Congreso. Las medidas para hacer frente a los efectos socioeconómicos a corto plazo del COVID-19 seguirán teniendo prioridad, y otros proyectos de ley pueden quedar en segundo plano.

El sentimiento antigubernamental sigue siendo elevado, y cualquier caso de corrupción que implique a funcionarios públicos puede exacerbar las tensiones sociales de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.



COSTA RICA

3
RANKING

6.45

Puntaje General 2021

6.43

Puntaje General 2020

n/a

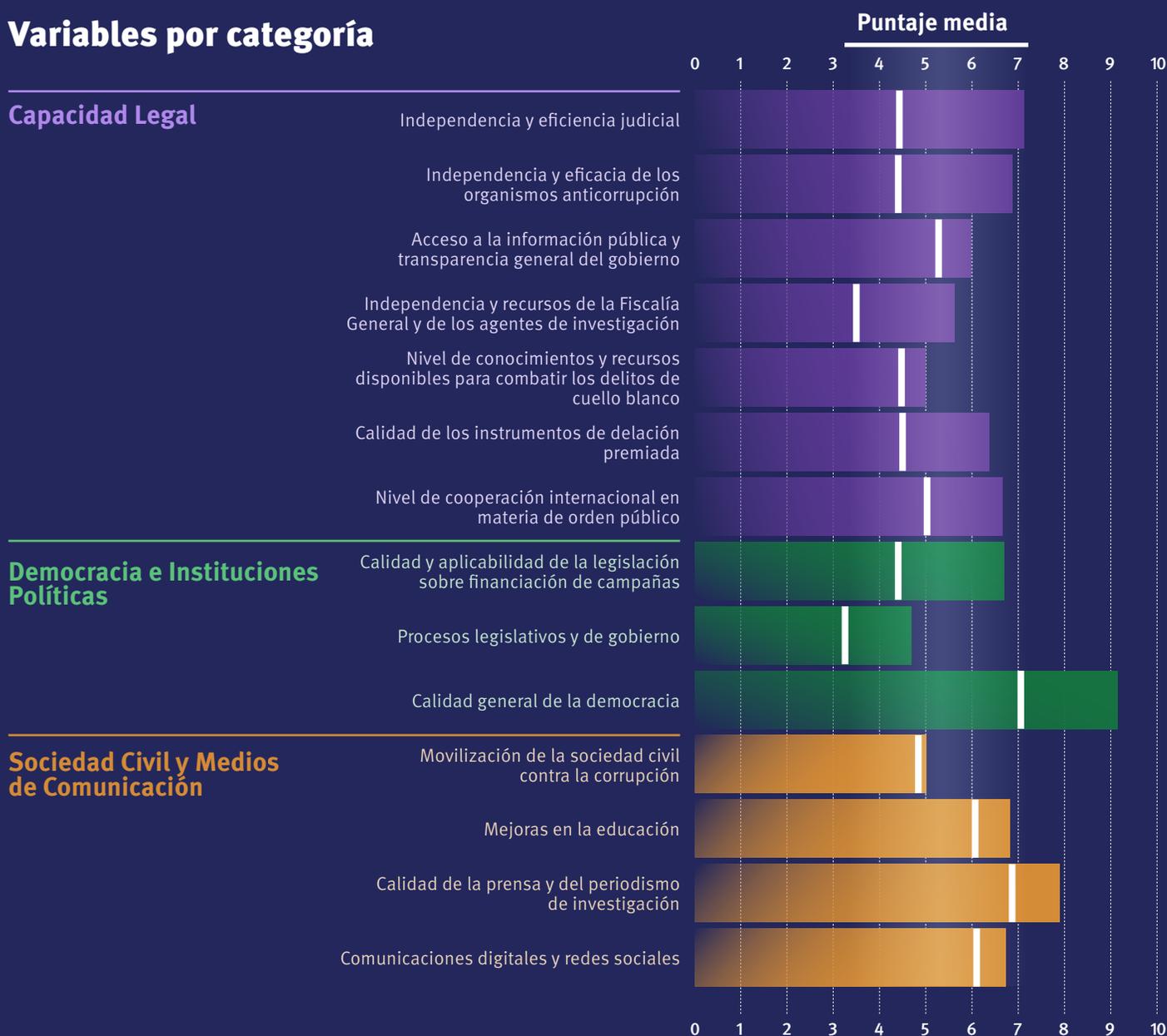
Puntaje General 2019

6.28 Capacidad Legal

6.80 Democracia e Instituciones Políticas

6.59 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





COSTA RICA

Al igual que en el 2020, Costa Rica se situó en el tercer puesto del Índice, por detrás de Uruguay y Chile. La puntuación global de Costa Rica se mantuvo estable, y el país volvió a superar a Chile en cuanto a capacidad legal, categoría en la que experimentó mejoras marginales, así como en la categoría de democracia e instituciones políticas.

Aunque una puntuación inalterada es una buena noticia en una región plagada de escándalos de corrupción, es una señal de que los esfuerzos anticorrupción avanzan lentamente en Costa Rica. Un proyecto de ley para regular las actividades de cabildeo que se presentó por primera vez en 2019 sigue estancado en la Asamblea Legislativa. Los principales retos de Costa Rica en la lucha anticorrupción siguen relacionados con los complejos procedimientos judiciales y las lagunas normativas. Estas ineficiencias han provocado un estancamiento incluso en casos de corrupción de gran repercusión, como el cementazo, una presunta trama en la que están implicados funcionarios del Estado, un banco público y una importadora de cemento de China.

Como muchos países, Costa Rica ha tenido problemas de transparencia durante la pandemia. Ha habido una mala asignación de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria y la información sobre contrataciones públicas ha sido limitada. Dentro de la categoría de capacidad legal, la mayoría de las variables se mantuvieron estables o experimentaron ligeros aumentos, excepto el acceso a la información pública, que disminuyó un 10%. En mayo, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que busca promover la transparencia en las contrataciones públicas mediante el uso de un sistema digital centralizado.

Los confinamientos pandémicos probablemente contribuyeron a una caída del 6% en la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, lo que condujo a una leve disminución en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Costa Rica ha tenido que implementar reformas anticorrupción para unirse a la OCDE en mayo. El país estará bajo una presión constante para llevar a cabo reformas estructurales en un futuro próximo. Un posible acuerdo de préstamo de 1,800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional está supeditado a la realización de varias reformas.

Costa Rica sostendrá elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2022. Es posible que surjan más denuncias de corrupción y mala gestión durante la pandemia, especialmente a nivel local, en el período previo a la votación.



PERÚ

4
RANKING

5.66

Puntaje General 2021

5.47

Puntaje General 2020

5.17

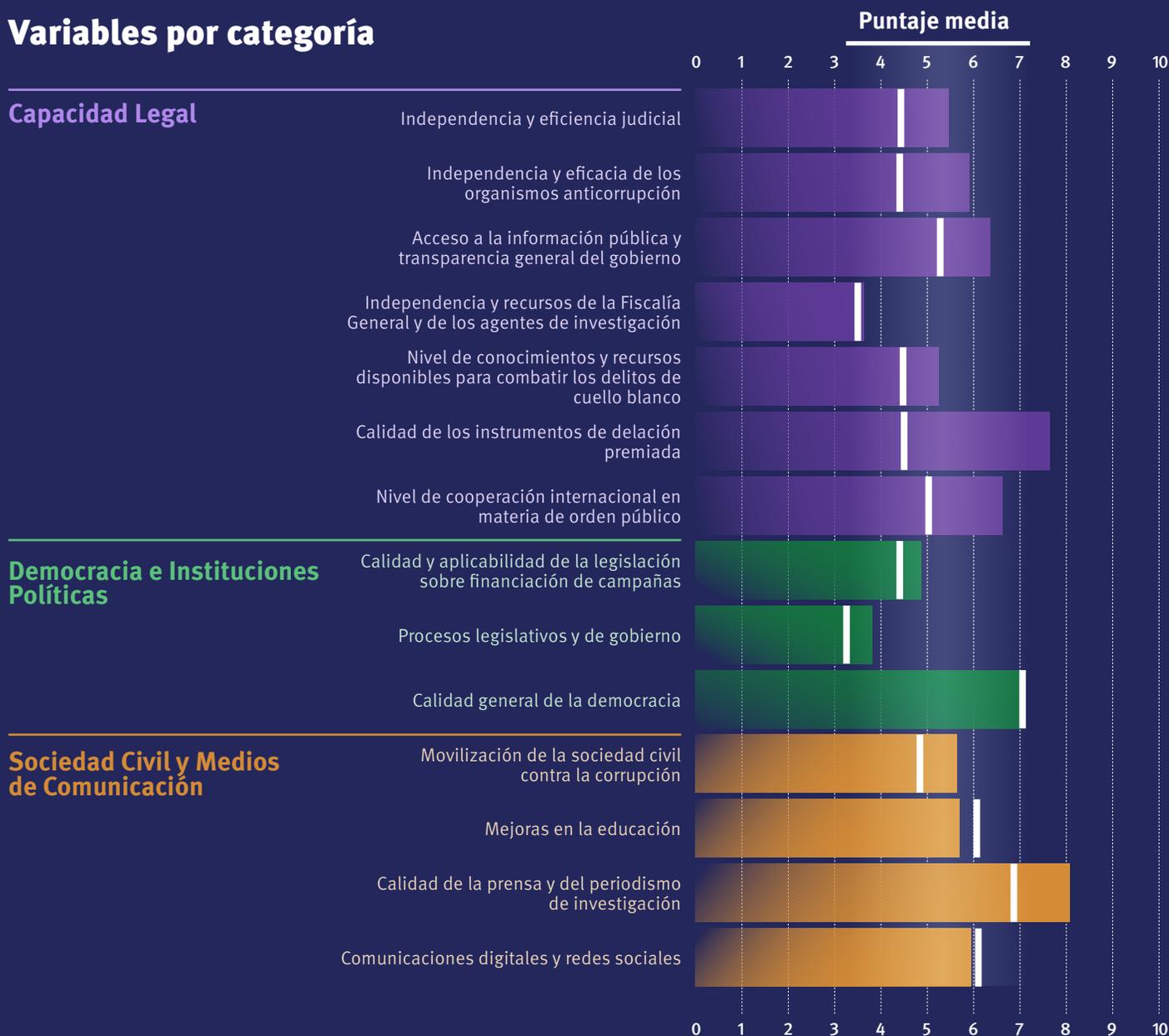
Puntaje General 2019

5.68 Capacidad Legal

5.21 Democracia e Instituciones Políticas

6.34 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





4

RANKING

PERÚ

A pesar de la agitación política de finales de 2020, la puntuación de Perú se mantuvo estable, lo cual refleja un progreso creciente en el ámbito de la lucha contra la corrupción. La puntuación de la capacidad legal del país se mantuvo relativamente sin cambios, y Perú experimentó un aumento del 12% en la categoría de democracia e instituciones políticas: Perú sostuvo primarias internas para los partidos por primera vez este año, y se aprobó una reforma para la financiación de las campañas en septiembre de 2020.

Aunque el ex presidente Martín Vizcarra ha sido acusado de presuntas prácticas corruptas, estos avances reflejan en parte los resultados de su campaña anticorrupción. Vizcarra, que fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020 por cargos de corrupción que él ha negado, fue posteriormente elegido para el Congreso en las elecciones de abril. Ese mismo mes fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años por presuntamente utilizar su posición política para recibir una vacuna anticipada en el escándalo vacunagate.

Incluso con los estrictos confinamientos por pandemia, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sólo experimentó un ligero retroceso, y en esta variable el Perú está en el cuarto lugar en la región. La destitución de Vizcarra fue seguida de grandes protestas. Las manifestaciones también provocaron la dimisión del congresista Manuel Merino, que ocupó la presidencia de Perú durante menos de una semana tras la destitución de Vizcarra.

El estancamiento en la categoría de capacidad legal refleja que la lucha de Perú contra la corrupción ha perdido parte del impulso que registró en el Índice del año pasado. La corrupción relacionada con la COVID-19 está muy extendida, y las restricciones por el confinamiento han ralentizado el ritmo de los procedimientos judiciales. Aun así, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra, ratifica y destituye a los jueces y fiscales, sigue avanzando en la lucha contra la corrupción en el poder judicial. En febrero, la JNJ despojó al ex fiscal general Pedro Chávarry de su condición de fiscal—Chávarry estaba presuntamente implicado en una red de corrupción, y notablemente destituyó de manera temporal a dos fiscales que dirigían la investigación de Odebrecht en Perú.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Pedro Castillo, el aparente ganador de la contienda presidencial del 6 de junio (los resultados no eran finales al momento de publicación de este reporte), ha prometido reforzar las agencias anticorrupción y crear un consejo nacional anticorrupción que él presidirá.

El Congreso está sumamente fracturado y puede seguir obstaculizando las reformas anticorrupción.



5
RANKING

ARGENTINA

5.16

Puntaje General 2021

5.32

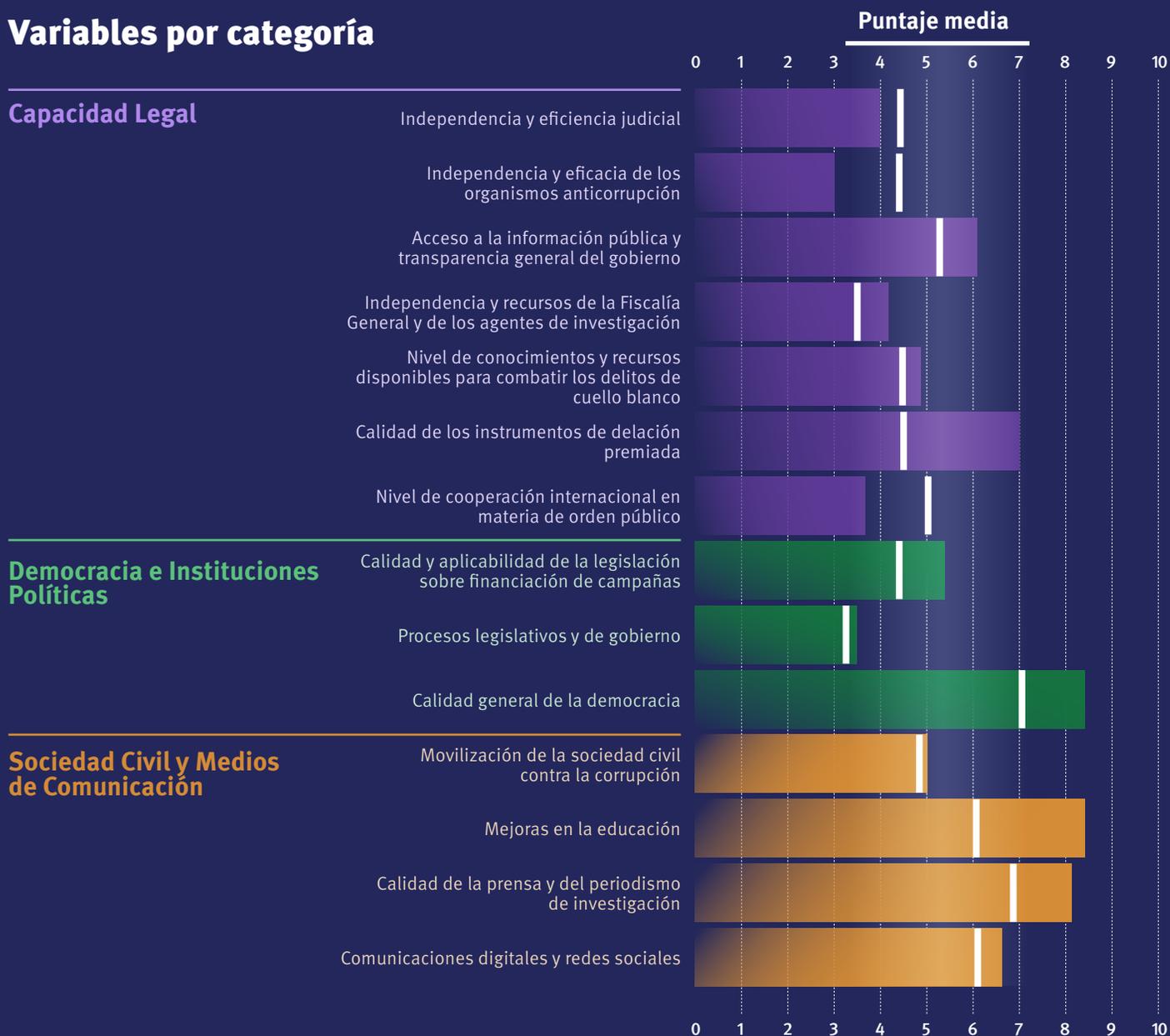
Puntaje General 2020

5.33

Puntaje General 2019

- 4.50** Capacidad Legal
- 5.71** Democracia e Instituciones Políticas
- 7.04** Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





5

RANKING

ARGENTINA

Aunque Argentina subió del sexto al quinto puesto en la clasificación del Índice 2021, su puntuación global experimentó un ligero descenso. La percepción de un aumento de la politización del poder judicial y de las instituciones anticorrupción durante la administración del presidente Alberto Fernández contribuyó a una caída del 7% en la puntuación de la capacidad legal de Argentina. Dentro de esta categoría, en Argentina se produjeron las reducciones más significativas en la independencia tanto de la fiscalía general como de los organismos anticorrupción. En octubre de 2020, la Oficina Anticorrupción se retiró como litigante en los casos penales que involucran a funcionarios y ex funcionarios del gobierno.

Los organismos de control internacionales siguen expresando su preocupación por la supuesta influencia que la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada en múltiples investigaciones relacionadas a la corrupción, ejerce sobre el poder judicial. En agosto de 2020, 15 funcionarios anticorrupción de la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron destituidos, poniendo en duda la independencia de la UIF—la mayoría de estos funcionarios desempeñaron un papel en las investigaciones de corrupción que implicaban a la vicepresidenta. Sin embargo, un destacado empresario percibido como cercano a Kirchner recibió una condena de prisión por lavado de dinero en febrero de 2021.

Una mejora del 8% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, en la que Argentina supera la media regional en todas las variables, indica la persistente vigilancia de la opinión pública en materia de corrupción. La puntuación de Argentina en la variable que mide la calidad de la prensa y el periodismo de investigación aumentó desde 2020, y el país se sitúa en este ámbito en segundo lugar, sólo por detrás de Uruguay.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

La agravada situación económica de Argentina ha contribuido a la falta de recursos—y de personal—para los organismos anticorrupción y los encargados de hacer cumplir la ley.

El gobierno de Fernández ha presentado una controvertida propuesta de reforma judicial que, de ser aprobada, permitiría al gobierno nombrar a más de 300 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos en los próximos dos años. Se aprobó en el Senado en agosto de 2020, pero se ha estancado por falta de apoyos en la Cámara baja y por otras prioridades que tiene el legislativo.

La corrupción será uno de los temas clave de cara a las elecciones legislativas de octubre del 2021, cuando la coalición peronista, actualmente en poder, tendrá una oportunidad de aumentar su ligera mayoría en ambas cámaras. Es posible que los candidatos de la oposición intenten incrementar la atención sobre las acusaciones de corrupción durante la campaña.



BRASIL

6
RANKING

5.07

Puntaje General 2021

5.52

Puntaje General 2020

6.14

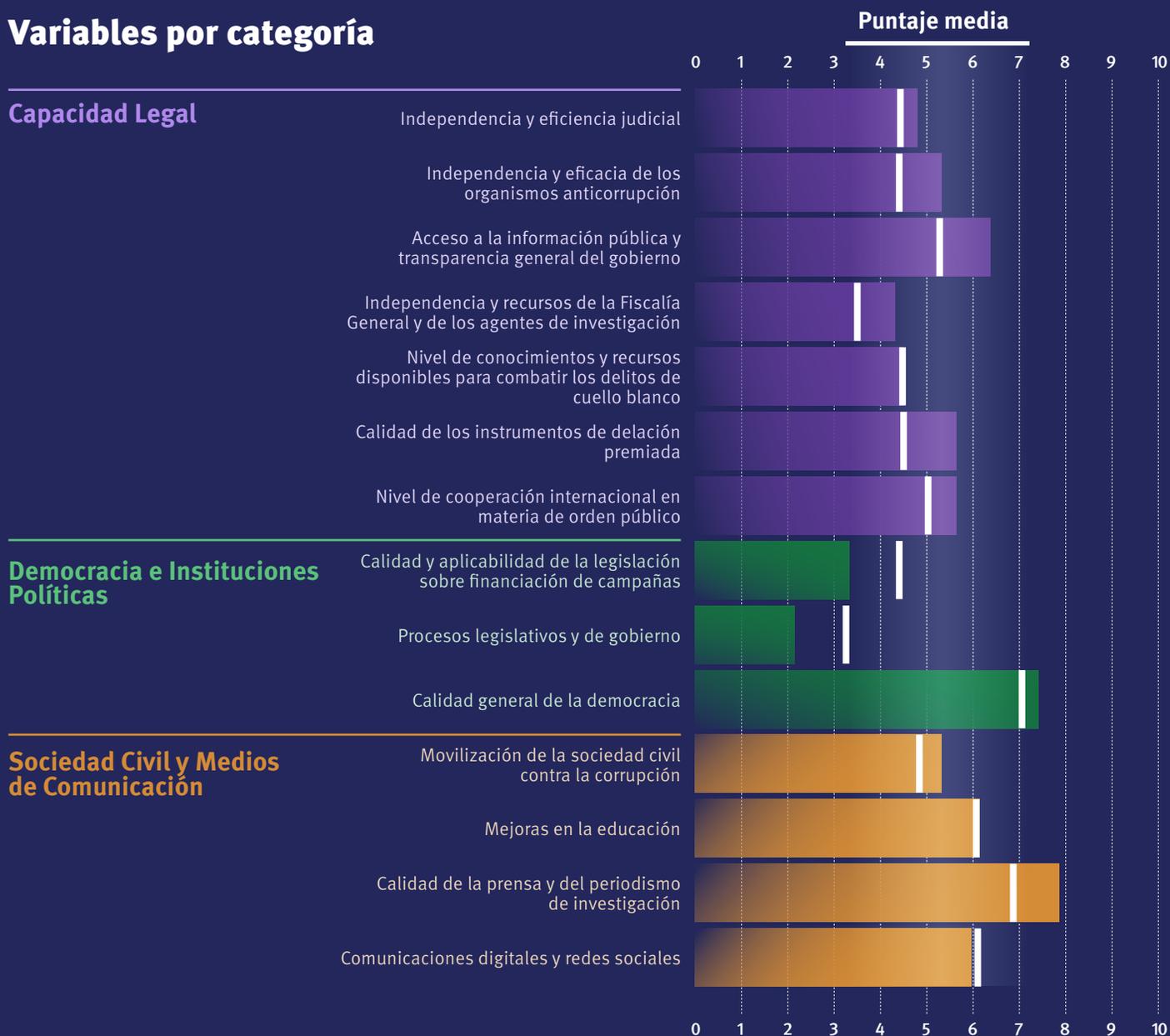
Puntaje General 2019

5.15 Capacidad Legal

4.16 Democracia e Instituciones Políticas

6.34 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





6

RANKING

BRASIL

.....

Brasil ha seguido una trayectoria descendente en el Índice CCC desde 2019, y en 2021 experimentó la mayor caída de puntos entre los 15 países analizados. Su puntuación global descendió un 8% respecto a 2020, y Brasil cayó del cuarto al sexto puesto en la clasificación general.

Dentro de la categoría de capacidad legal (con un descenso de casi el 9% desde 2020), el país tuvo disminuciones en la independencia tanto de sus organismos anticorrupción como de la fiscalía general. El Índice refleja el nombramiento por parte del gobierno de Jair Bolsonaro de personas percibidas como menos independientes a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal. Las investigaciones sobre la corrupción transnacional también perdieron impulso, y la operación Lava Jato fue desmantelada en febrero de 2021. La única mejora en la capacidad legal de Brasil fue un ligero aumento en su independencia judicial, debido a los recientes intentos de reforzar la separación de poderes.

Brasil registró un descenso del 11% en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo fue un factor decisivo. El capital político de Bolsonaro ha disminuido a lo largo de la pandemia, lo que ha llevado a que sus aliados recurran a la política clientelista, intercambiando nombramientos y fondos públicos a cambio de apoyo en el Congreso.

El aumento de la polarización política también ha reducido la capacidad de movilización de los grupos de la sociedad civil. Esto se manifiesta en parte en el leve descenso en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. Sin embargo, una variable de esa categoría, la calidad de la prensa, aumentó un 3%. El vibrante ecosistema de los medios de comunicación de Brasil sigue proporcionando un importante escrutinio sobre los asuntos de corrupción.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Los jefes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal, respaldados por el gobierno, podrían seguir recibiendo presiones para proteger al presidente y a su círculo interno ante las investigaciones de corrupción.

Bolsonaro nombrará a un segundo juez del Tribunal Supremo a mediados de 2021, un indicador clave de hasta qué punto el gobierno planea aumentar su influencia sobre el poder judicial.

Recientes decisiones judiciales han beneficiado a acusados de alto perfil en la investigación Lava Jato, incluyendo pero no limitado al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estas sentencias pueden afectar a otros acusados, anulando o revocando decisiones en casos adjudicados por Lava Jato desde 2014.



7
RANKING

COLOMBIA

4.81

Puntaje General 2021

5.18

Puntaje General 2020

5.36

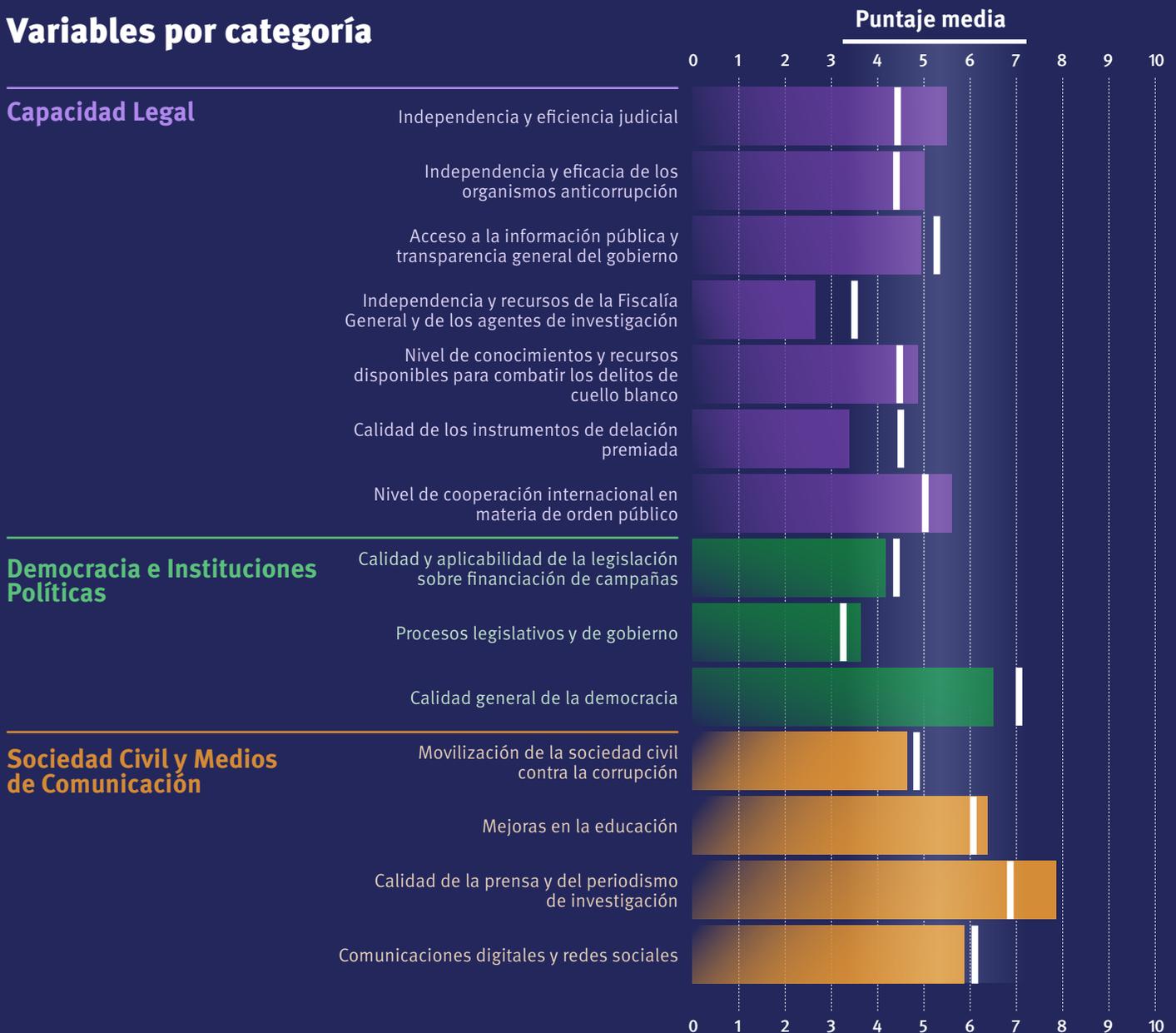
Puntaje General 2019

4.53 Capacidad Legal

4.70 Democracia e Instituciones Políticas

6.18 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





COLOMBIA

Colombia sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la corrupción. El país ha estado en una trayectoria descendente de varios años en el Índice: su puntuación general cayó un 10% de 2019 a 2021.

Casi todos los indicadores dentro de la categoría de capacidad legal disminuyeron, incluyendo una caída del 20% en la variable que mide la independencia del fiscal general y una caída del 17% en la independencia de los organismos anticorrupción. Estos retrocesos reflejan la percepción de que el Presidente Iván Duque ha colocado a figuras menos independientes en puestos clave como el de Defensor del Pueblo, el de Fiscal General y el de Procurador General, misma que fue nombrada en enero de 2021. Los gastos de emergencia en el sector sanitario han dado lugar a irregularidades en las contrataciones públicas y a denuncias de otros casos de corrupción. La transparencia en torno a estos gastos se percibe como insuficiente, lo que explica un descenso del 21% en la variable que mide el acceso a la información pública.

Colombia experimentó un aumento del 12% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, en el contexto de las actuales manifestaciones en las calles en las cuales la corrupción es una de las muchas preocupaciones de los manifestantes.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

El poder judicial de Colombia, y la oficina de la Procuradora General en particular, se enfrentará a un escrutinio continuo ante la posibilidad de interferencia política por parte del poder ejecutivo.

Las elecciones presidenciales están previstas para mayo de 2022, y las medidas anticorrupción serán un tema importante en las campañas. Existe el riesgo de que, con la clase política enfocada en las elecciones, los proyectos fundamentales de lucha contra la corrupción, incluyendo un proyecto de ley anticorrupción multifacético propuesto en octubre de 2020, no avancen.

Es posible que haya más avances en la investigación en curso sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña para la reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, algunas de las cuales podrían haber implicado a Odebrecht.



ECUADOR

8
RANKING

4.77

Puntaje General 2021

4.19

Puntaje General 2020

n/a

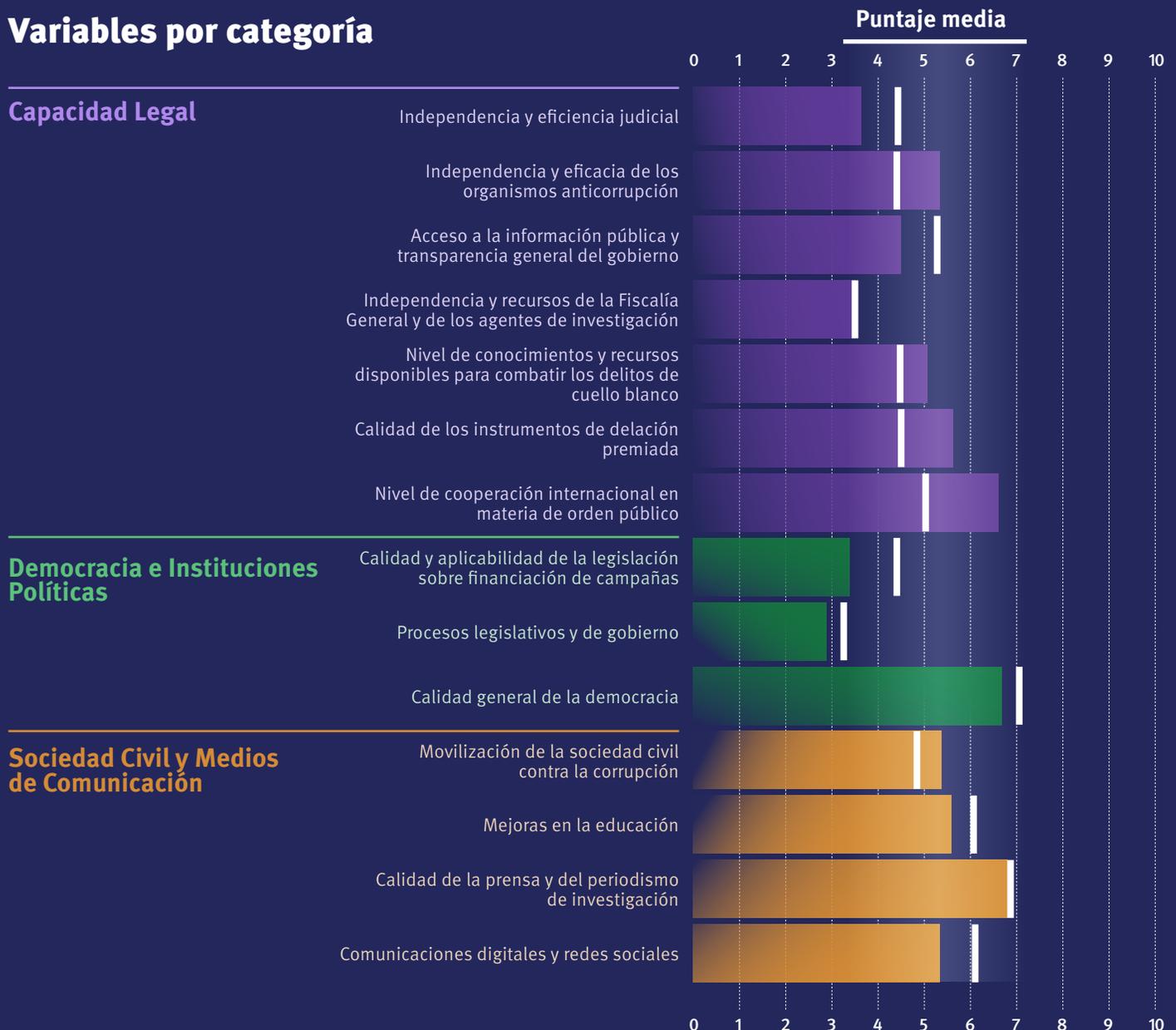
Puntaje General 2019

4.78 Capacidad Legal

4.17 Democracia e Instituciones Políticas

5.76 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





8

RANKING

ECUADOR

Eccuador, cuya puntuación global aumentó un 14% desde 2020, ha avanzado en su capacidad para combatir la corrupción. El país experimentó un aumento del 16% en la categoría de capacidad legal, con incrementos en las puntuaciones correspondientes a variables importantes como la independencia de los organismos de lucha contra la corrupción, la independencia y eficiencia de la fiscalía general y la eficiencia judicial. Estas mejoras, que situaron a Ecuador por encima de México, Colombia y Argentina en el ranking de capacidad legal, se vieron reforzados por las investigaciones de la fiscal general Diana Salazar. En abril, su oficina detuvo a altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno, en el marco de una investigación sobre la corrupción en la empresa petrolera estatal Petroecuador.

También ha habido avances en el frente legislativo. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una ley anticorrupción que modifica el código penal e incorpora los delitos penales establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La aprobación por parte de la Asamblea de la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes en enero de 2021 es otro paso positivo, ya que permite al Estado recuperar bienes que tienen un origen ilegal o ilícito. El aumento del 36% de Ecuador en la variable que mide la capacidad de combatir los delitos de cuello blanco refleja en parte estos avances.

En septiembre de 2020 se confirmó una sentencia de prisión contra el ex presidente Rafael Correa por violar las leyes de financiación de campañas, lo cual le impidió presentarse como vicepresidente en las elecciones de febrero de 2021. En enero de 2021, el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glas, fue condenado a ocho años de prisión por otro caso de corrupción relacionado con supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato petrolero.

En Ecuador se han registrado numerosos casos de corrupción asociados a la pandemia, a menudo relacionados con equipos médicos vendidos a precios inflados. Al mismo tiempo, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción ha aumentado considerablemente, y las ONGs colaboraron con el gobierno en la creación de una plataforma digital que rastrea las contrataciones públicas de acuerdo con el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

El presidente Guillermo Lasso, cuyo mandato comenzó en mayo, se ha comprometido a combatir la corrupción y a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Sin embargo, carece de apoyo en la Asamblea Nacional, lo cual puede dificultar su capacidad para aprobar más reformas anticorrupción.



PANAMÁ

9
RANKING

4.55

Puntaje General 2021

4.17

Puntaje General 2020

n/a

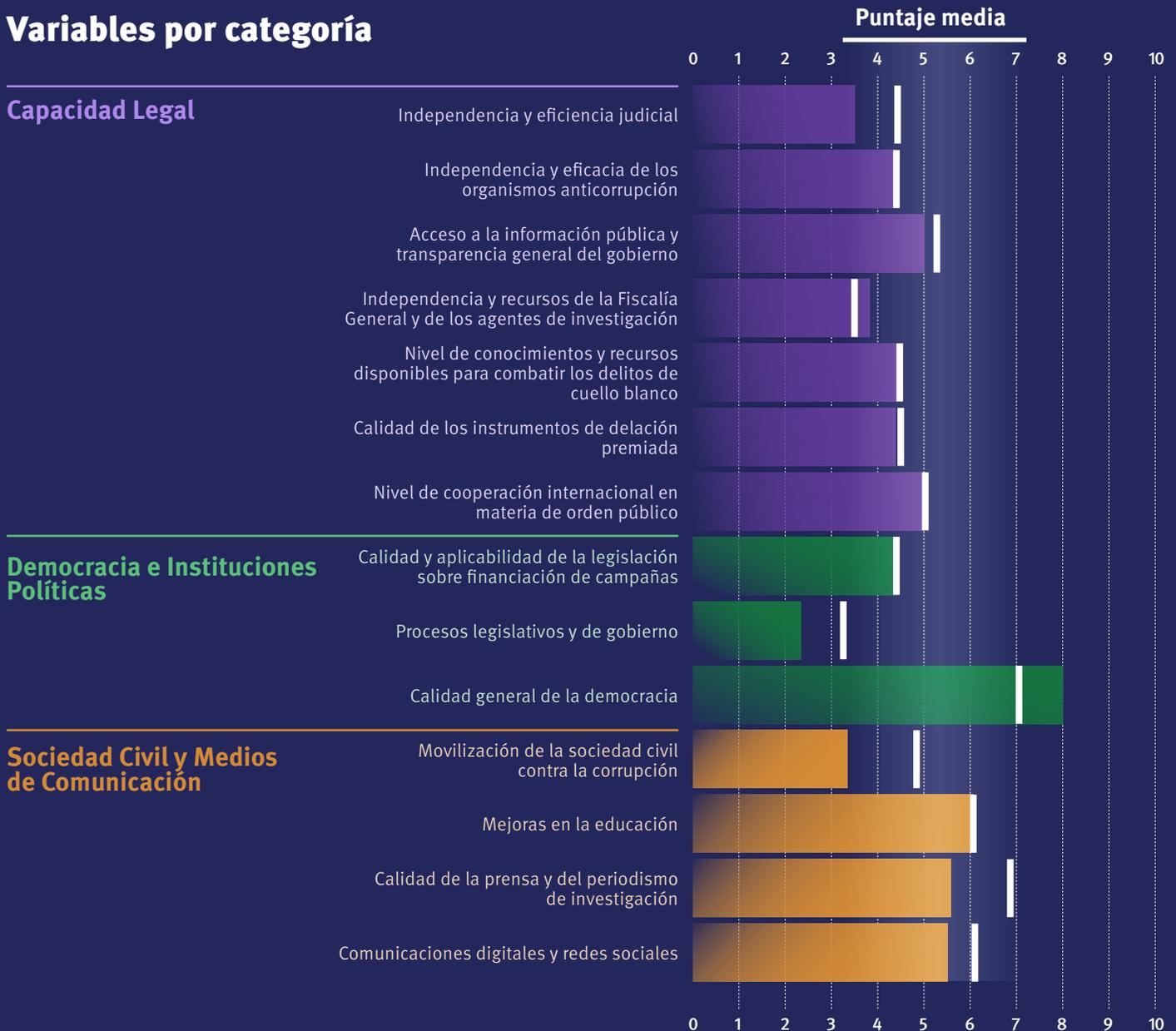
Puntaje General 2019

4.27 Capacidad Legal

4.91 Democracia e Instituciones Políticas

5.11 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





PANAMÁ

Aunque Panamá sigue siendo un centro mundial de lavado de dinero, su desempeño en el Índice refleja mejoras en su entorno anticorrupción. Un aumento de casi el 9% en su puntuación global hizo que Panamá pasara del 10º al 9º puesto en la clasificación general, y las puntuaciones en las categorías de capacidad legal y democracia e instituciones políticas aumentaron cada una un 12%. El gobierno ha intentado sacar a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias en materia de antilavado de activos y combatiendo el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Estos esfuerzos se reflejan en un aumento del 21% en la puntuación de la lucha contra los delitos de cuello blanco, lo que sitúa a Panamá justo por encima de la media regional. En agosto de 2020, Panamá y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un grupo de trabajo formado por funcionarios panameños que recibirán formación del FBI para atacar las redes de blanqueo de capitales y perseguir la corrupción.

Panamá también ha logrado avances para mejorar la transparencia. En marzo de 2020, Panamá aprobó una ley que establece un registro de los beneficiarios finales de las personas jurídicas. En septiembre, entró en vigor una ley que establece una plataforma digital pública de los proyectos de adquisiciones gubernamentales.

El país ha sido testigo de la corrupción relacionada con las adquisiciones durante la pandemia, en algunos casos involucrando a funcionarios de alto nivel. Las autoridades investigaron la supuesta compra de materias médicas con sobrepeso por oficiales del Ministerio de la Presidencia. Aunque éste y otros presuntos escándalos han provocado la indignación pública, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sigue siendo escasa: Panamá sólo está por delante de Bolivia en este ámbito.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

La evolución del caso de corrupción de Odebrecht podría marcar un avance crucial en la lucha contra la corrupción en Panamá. El ex presidente Juan Carlos Varela está siendo investigado por haber aceptado presuntamente donaciones ilícitas de Odebrecht para su campaña. En julio de 2020, Estados Unidos acusó a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli de lavado de dinero y sobornos relacionados con Odebrecht. Martinelli fue acusado de lavado de dinero en un caso separado.

El Gobierno seguirá esforzándose por cumplir las normas del GAFI en materia de ALA/CFT antes de la próxima revisión del GAFI. La efectiva puesta en marcha del registro de beneficiarios finales será fundamental para asegurar la eliminación de Panamá de la lista gris, y podría ayudar en las investigaciones sobre corrupción.



REPÚBLICA DOMINICANA

10
RANKING

4.38

Puntaje General 2021

3.26

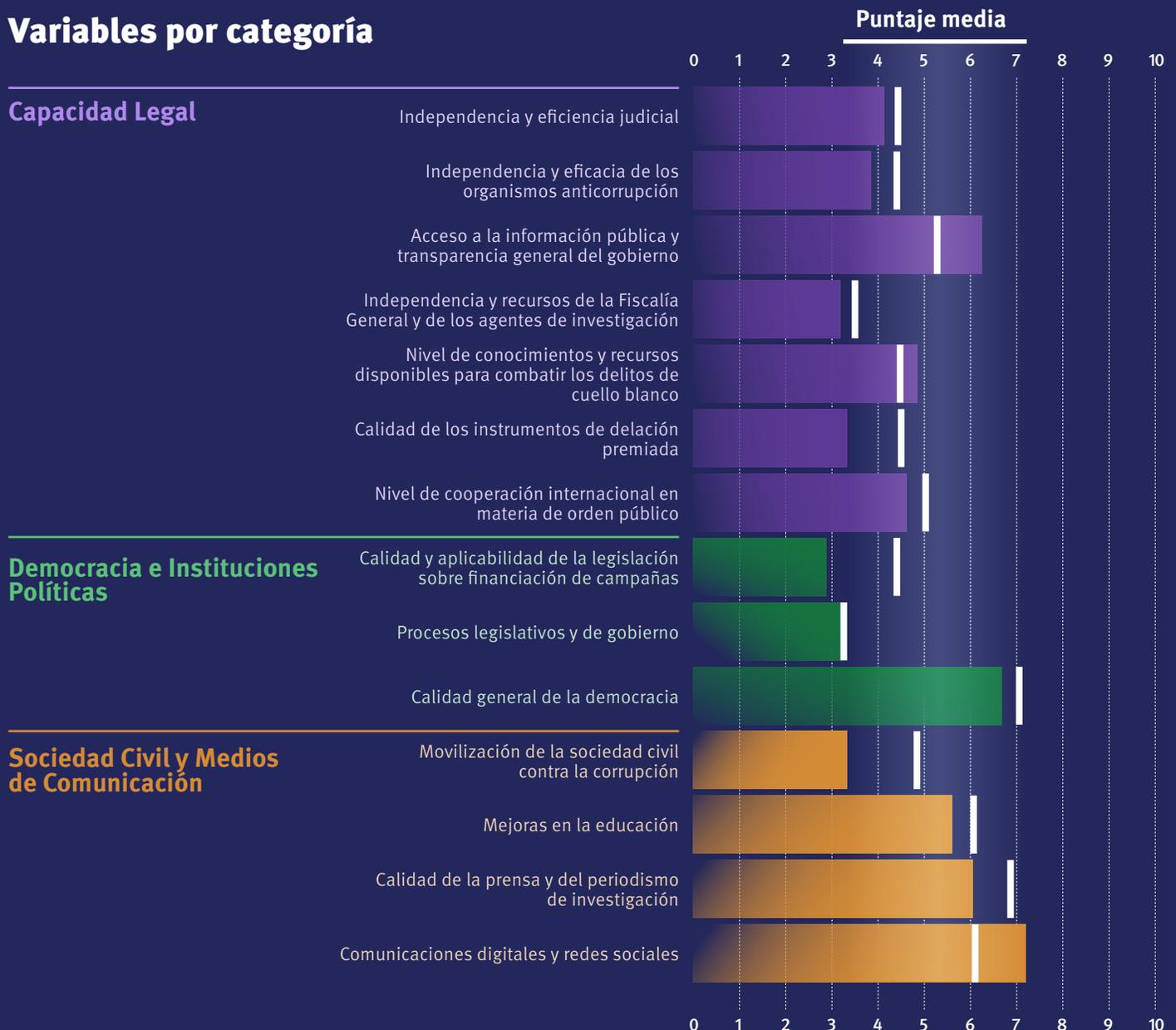
Puntaje General 2020

n/a

Puntaje General 2019

- 4.21** Capacidad Legal
- 4.11** Democracia e Instituciones Políticas
- 5.57** Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





10

RANKING

REPÚBLICA DOMINICANA

La República Dominicana destaca como uno de los países que más ha mejorado en el Índice CCC, pasando del 13º al 10º puesto global. Aun así, algunos avances desde el año pasado se beneficiaron de una base de comparación relativamente baja. Las mejoras más significativas se produjeron en la categoría de capacidad legal, lo cual refleja un impulso anticorrupción del Presidente Luis Abinader, que entró en funciones en agosto de 2020. La puntuación de la República Dominicana en la categoría de democracia e instituciones políticas aumentó un 14%, reflejado en las elecciones presidenciales pacíficas de julio y a la estabilidad política tras la transición de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Abinader ha buscado apoyar la coordinación interinstitucional en materia anticorrupción con la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. El nombramiento de una procuradora general ampliamente percibida como independiente contribuyó a una gran mejora en la variable que mide la independencia y los recursos de la fiscalía general, pero el país permanece por debajo del promedio regional en esta variable. Las investigaciones anticorrupción se han incrementado desde que Abinader llegó al poder. Las autoridades han investigado la presunta corrupción en los contratos públicos que involucran a ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina y a sus familiares en la Operación Antipulpo. Está en marcha otra investigación de alto nivel sobre una supuesta red de corrupción durante el gobierno de Medina. Los esfuerzos anticorrupción también han afectado a miembros del gobierno de Abinader: en febrero, el presidente destituyó al ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, por la supuesta compra de equipos médicos con sobreprecio.

El país también experimentó un aumento del 12% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. Las mejoras en las variables que miden la movilización de la sociedad civil contra la corrupción y la variable de comunicaciones digitales y redes sociales señalan que el activismo digital ha estado presente durante toda la pandemia.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Las investigaciones anticorrupción contra funcionarios de administraciones anteriores continuarán, pero se espera que los juicios sean largos. Está en marcha un juicio contra seis acusados de recibir presuntos sobornos de Odebrecht.

Los ciudadanos están cada vez más comprometidos en la lucha contra la corrupción, y es probable que aumente el escrutinio de la sociedad civil sobre las políticas anticorrupción del gobierno de Abinader.



MÉXICO

11
RANKING

4.25

Puntaje General 2021

4.55

Puntaje General 2020

4.65

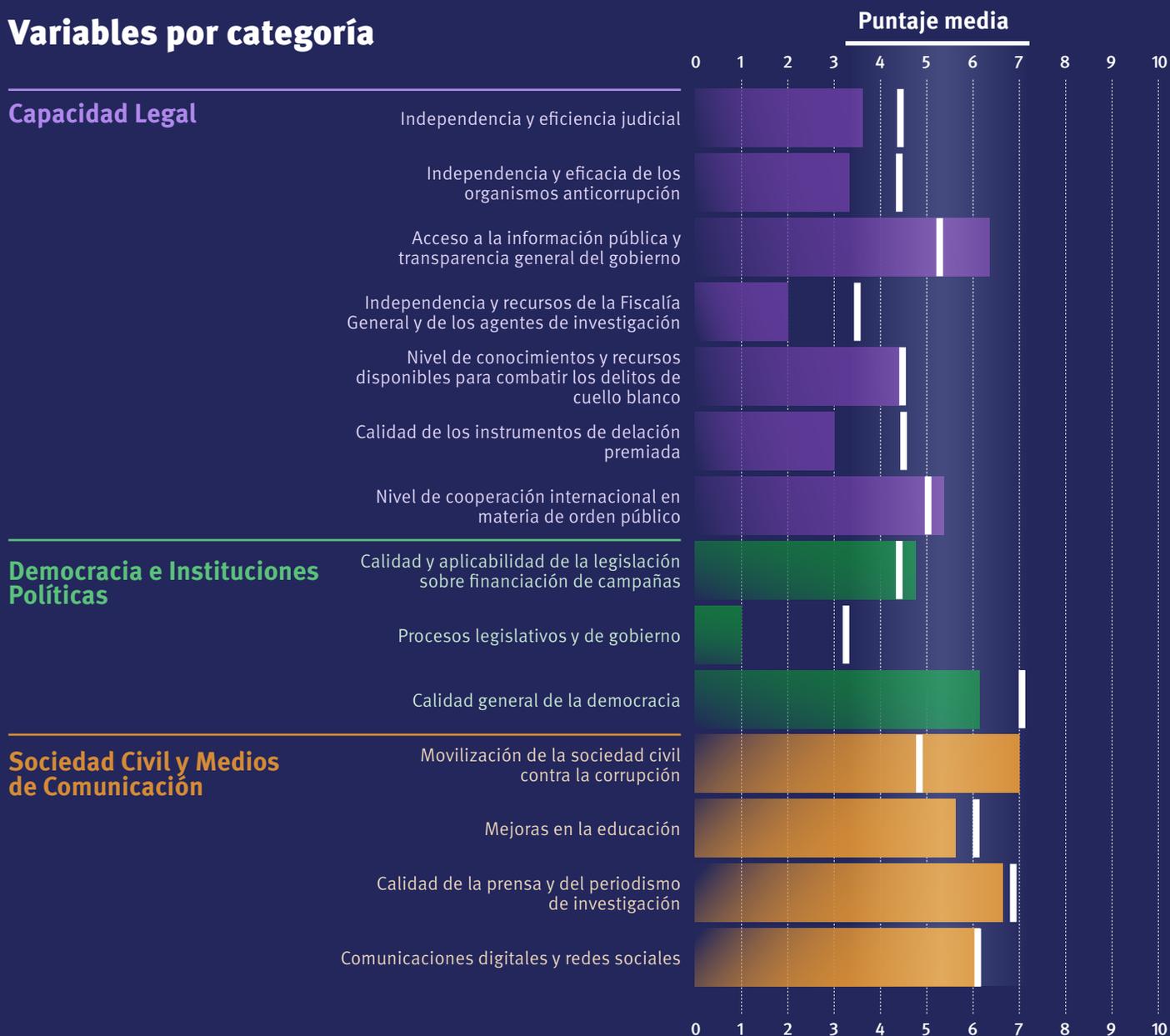
Puntaje General 2019

3.82 Capacidad Legal

4.08 Democracia e Instituciones Políticas

6.35 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





11

RANKING

MÉXICO

México se encuentra en una clara trayectoria descendente en el Índice CCC—mientras que el descenso de 2019 a 2020 fue de apenas un 2%, su puntuación global en 2021 cayó un 7%. Esta caída, junto con los retrocesos en dos de las tres categorías, hizo que México pasara del octavo lugar en 2020 al onceavo en 2021. En el último año, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha continuado con la retórica anticorrupción con la que hizo campaña en 2018, incluso declaró en una conferencia de prensa matutina este año que “ya no hay corrupción” en México. Sin embargo, siguen sin resolverse destacados casos de corrupción, como el del ex director general de PEMEX Emilio Lozoya, al tiempo que han surgido acusaciones de corrupción que implican a políticos, incluidos miembros del partido MORENA, al que pertenece AMLO.

La puntuación de México descendió un 8% en la categoría de capacidad legal, donde ahora está situado sólo por delante de Venezuela y Bolivia en la variable que mide la independencia del fiscal general. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha puesto en marcha, e incluso ha sufrido importantes recortes presupuestarios como parte de las medidas de austeridad. Esto contribuyó a un descenso del 13% en la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción. Ha habido falta de transparencia tanto en la contratación pública durante la pandemia como en los fideicomisos, varios de los cuales han sido desmantelados y centralizados bajo el poder ejecutivo.

Al país le fue mejor en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, donde México ocupa el quinto lugar en la región. A pesar de los ataques retóricos de AMLO a las ONGs, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sigue siendo fuerte, registrando más de 2 puntos por encima de la media regional, sólo detrás de Uruguay. México también experimentó aumentos en las dos variables que miden el uso de las comunicaciones digitales y las redes sociales y la calidad de la prensa.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

En los meses siguientes a las elecciones intermedias, será crucial vigilar si se mantiene la integridad de las instituciones independientes. El presidente y los integrantes de MORENA han criticado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE) y podrían buscar reformas que afecten su autonomía.

AMLO ha apoyado una iniciativa del Senado para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien anteriormente ha apoyado al presidente. La medida suscita dudas sobre la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial.



PARAGUAY

12
RANKING

4.08

Puntaje General 2021

3.88

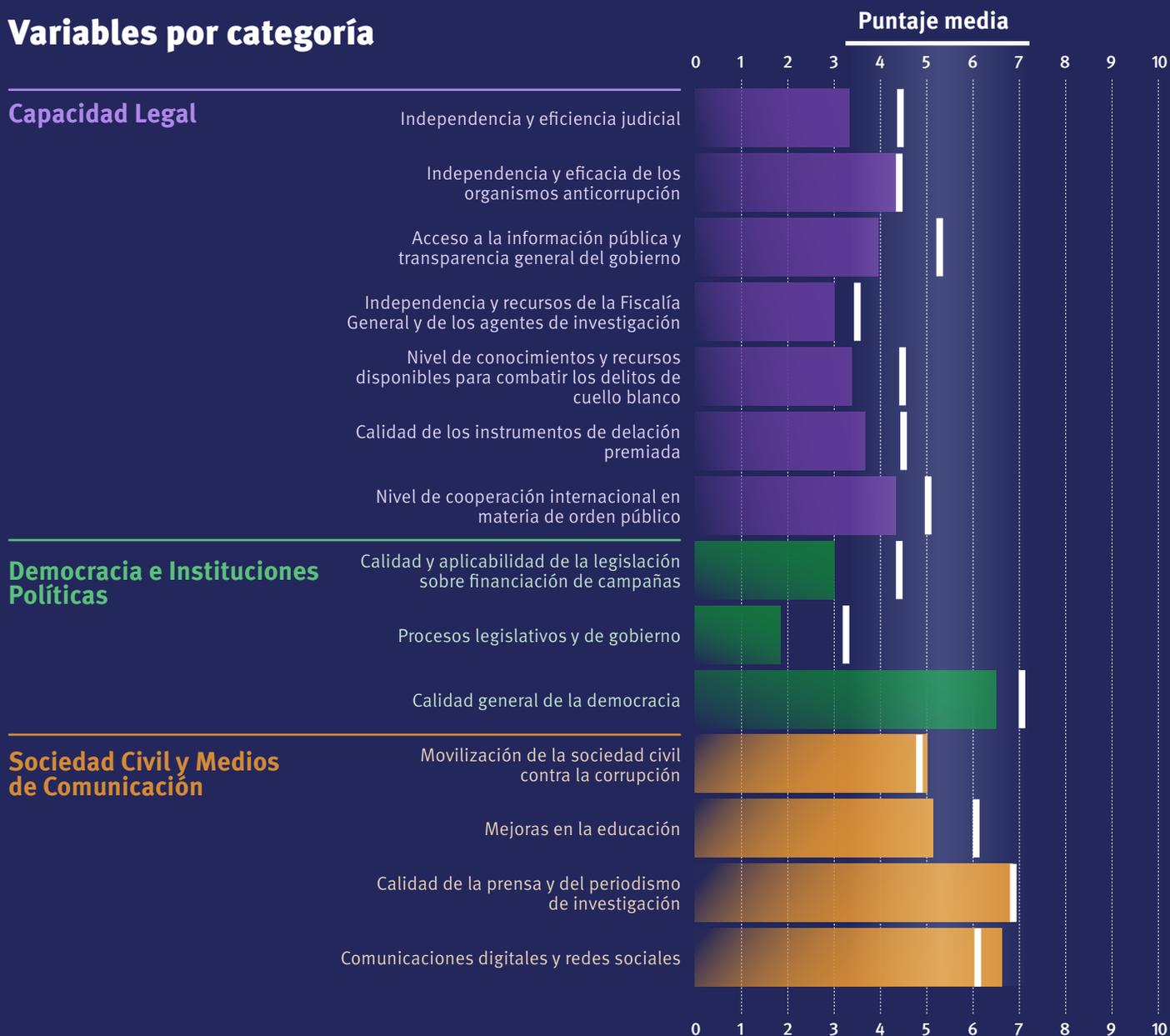
Puntaje General 2020

n/a

Puntaje General 2019

- 3.69** Capacidad Legal
- 3.95** Democracia e Instituciones Políticas
- 5.92** Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





12

RANKING

PARAGUAY

La puntuación de Paraguay ha mejorado ligeramente desde 2020, pero sigue siendo uno de los países con peor rendimiento en la clasificación general. En las categorías de democracia e instrucciones políticas y de capacidad legal, ocupa el antepenúltimo lugar. La politización de las instituciones judiciales es un problema persistente – Paraguay sólo se sitúa por encima de Bolivia y Venezuela en la variable que evalúa la independencia judicial. En febrero de 2021, los medios de comunicación nacionales y la sociedad civil cuestionaron el nombramiento de César Diesel para el Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con el vicepresidente Hugo Velázquez.

Dentro de la categoría de capacidad legal, Paraguay experimentó el mayor descenso en el acceso a la información pública, el cual se redujo en un 16%. La percepción de falta de transparencia en los gastos de emergencia y el supuesto mal uso de los recursos públicos para luchar contra la pandemia desencadenaron grandes manifestaciones contra el gobierno en marzo de 2021. Cuatro ministros del gabinete fueron reemplazados y el Presidente Mario Abdo Benítez sobrevivió a un intento de destitución, el segundo desde que llegó al cargo en 2018.

Al igual que en 2020, Paraguay obtuvo los mejores resultados en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, donde experimentó un aumento de casi el 11%. Paraguay registró la quinta mejor puntuación en comunicaciones digitales y redes sociales y también tuvo un nivel de movilización de la sociedad civil contra la corrupción superior a la media. El activismo en las redes sociales fue clave para mantener las protestas de marzo.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Los niveles de desconfianza hacia los funcionarios e instituciones públicas persistirán mientras el gobierno se esfuerza por hacer frente a la pandemia y por adquirir vacunas. Las sospechas de cualquier práctica de corrupción pueden conducir a una mayor inestabilidad política.

La implementación de la lucha contra el lavado de dinero sigue siendo un desafío para Paraguay, pero la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha mejorado la capacidad del país para enfrentar este problema, aprobando regulaciones en noviembre de 2020 para evitar que los grupos terroristas utilicen el sistema financiero nacional. Los funcionarios tratarán de reforzar aún más las capacidades de lucha contra el lavado de dinero antes de que se produzca la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a finales de 2021.

Paraguay es un centro clave para el tráfico de drogas y el lavado de dinero para los grupos delictivos organizados brasileños, en particular para el Primer Comando de la Capital (PCC). Su presencia en Paraguay debilita aún más el entorno de anticorrupción del país.



GUATEMALA

13
RANKING

3.84

Puntaje General 2021

4.04

Puntaje General 2020

4.55

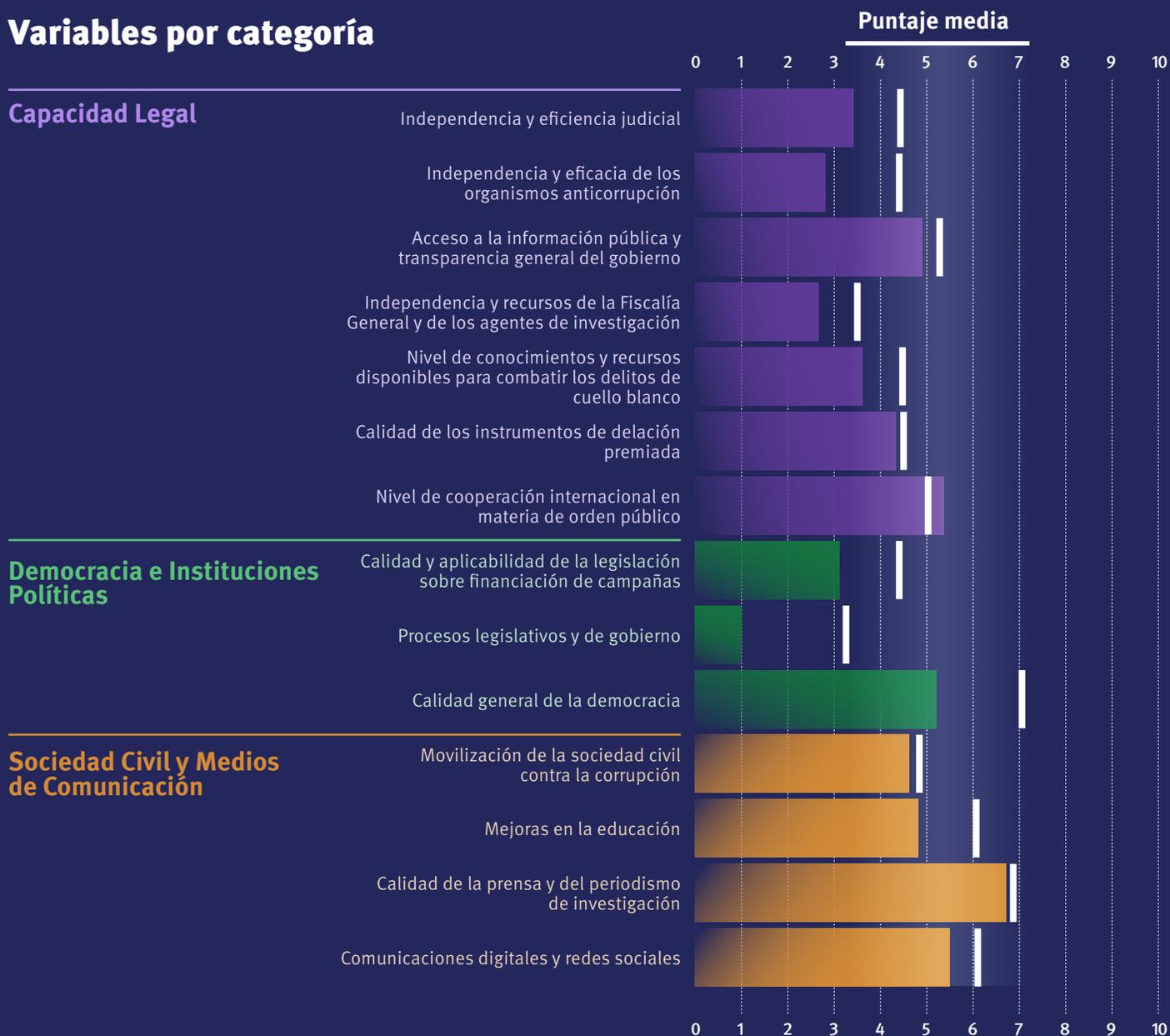
Puntaje General 2019

3.75 Capacidad Legal

3.12 Democracia e Instituciones Políticas

5.43 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





13

RANKING

GUATEMALA

Guatemala cayó del 11º al 13º puesto en el Índice, y su puntuación global continuó una tendencia a la baja, cayendo un 5% en el 2021 y un 16% desde 2019. Los esfuerzos anticorrupción han disminuido desde 2019, cuando se disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU. Guatemala vio un descenso del 9% en la categoría de capacidad legal, y la variable del Índice que mide la independencia y la eficiencia de las agencias anticorrupción se desplomó un 32%. En enero del 2020, el presidente Alejandro Giammattei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, un organismo que funciona bajo el control del poder ejecutivo y que no ha realizado grandes investigaciones. Por el contrario, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), un organismo del Ministerio Público, ha seguido realizando investigaciones anticorrupción, a pesar de los limitados recursos financieros que tiene y de la presión política.

Una controversia en abril de 2021 que involucra a la Corte de Constitucionalidad explica el descenso del 11% de Guatemala en la variable de independencia y eficiencia judicial. En un caso que recibió atención internacional, el Congreso se negó a nombrar a Gloria Porras, una jueza conocida por su lucha contra la corrupción, a la Corte después de haber sido reelegida para un mandato de cinco años.

Aunque la variable de la movilización de la sociedad civil del país sufrió un retroceso del 7%, una serie de protestas condujeron a cambios en las políticas públicas. A finales de 2020, los guatemaltecos protestaron contra la falta de transparencia en las adquisiciones de emergencia, lo que obligó al gobierno a archivar un plan presupuestario ampliamente criticado. Las redes sociales fueron clave en la organización de estas manifestaciones, y el país experimentó una mejora del 11% en su variable de comunicación digital.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Es posible que la clase política dominante y las élites empresariales sigan oponiéndose a los esfuerzos anticorrupción, como sugieren los intentos pasados para dismantelar la FECI y para bloquear investigaciones sustanciales. Los jueces y fiscales independientes pueden seguir enfrentándose a las amenazas de políticos e individuos influyentes que buscan socavar su trabajo.

Las prácticas corruptas en Guatemala se enfrentarán a un mayor escrutinio internacional, sobre todo por parte de los Estados Unidos. El gobierno de Biden está vigilando de cerca la corrupción en el Triángulo Norte y podría sancionar a individuos corruptos de la región con herramientas como la venidera Lista Engel o la Ley Global Magnitsky.

El continuo descontento de los ciudadanos con la mala gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Estado puede reavivar las manifestaciones antigubernamentales.



BOLIVIA

14
RANKING

2.43

Puntaje General 2021

2.71

Puntaje General 2020

n/a

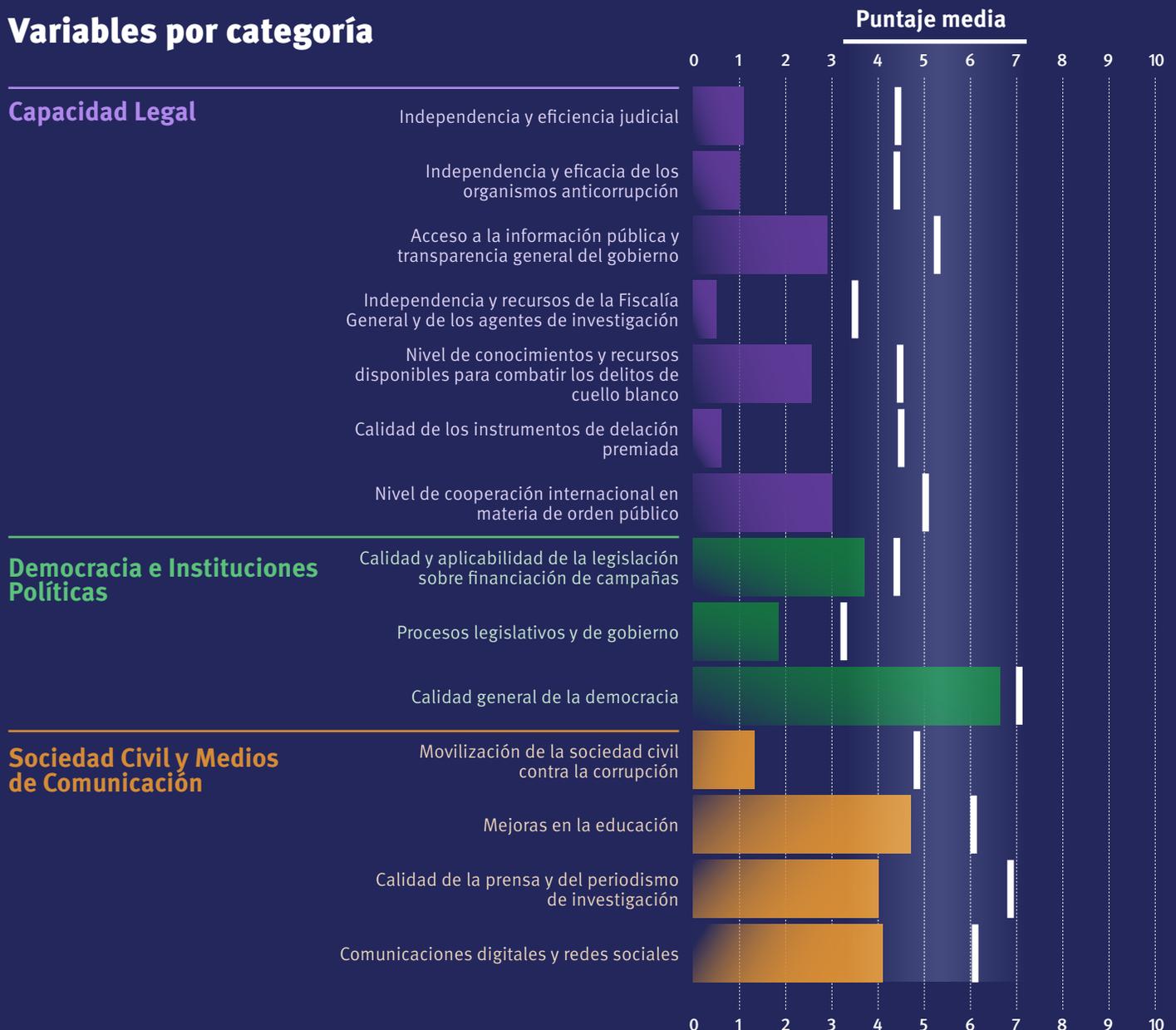
Puntaje General 2019

1.53 Capacidad Legal

3.99 Democracia e Instituciones Políticas

3.54 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría





14
RANKING

BOLIVIA

Al igual que en 2020, Bolivia obtuvo una puntuación solamente superior a la de Venezuela en el Índice CCC. Durante un período de rápidos cambios políticos, la puntuación global del país disminuyó un 10%, y su puntuación en la categoría de capacidad legal cayó un 26%. Bolivia obtuvo al menos tres puntos por debajo de la media regional en variables clave como la independencia y eficiencia judicial, la independencia del fiscal general y la independencia y eficiencia de los organismos anticorrupción.

Estas tendencias reflejan las acciones de la administración del presidente Luis Arce, del partido MAS, que fue elegido en octubre de 2020. Arce prometió unir el país, pero se le acusa de utilizar el poder judicial para atacar a la oposición, una táctica que también implementó la ex presidenta interina Jeanine Áñez. En marzo, Áñez fue detenida y puesta en prisión preventiva. Fue acusada de terrorismo y sedición (cargos que su gobierno también imputó al ex presidente Evo Morales), y las autoridades han declarado que Áñez y los miembros de su gabinete podrían enfrentar cargos de corrupción.

La pandemia ha exacerbado aún más los riesgos de corrupción, sobre todo los relativos a procesos de contratación más laxos. Un caso destacado fue el de un ex ministro de salud: en mayo de 2020, Marcelo Navajas fue destituido y luego detenido en relación con la supuesta compra de respiradores a precios excesivos.

Bolivia descendió del 10º al 12º puesto en la categoría de democracia e instituciones políticas impulsado por una menor puntuación en la variable de procesos legislativos y de gobierno. Sin embargo, Bolivia está delante de Paraguay, México y Guatemala en su calidad democrática general. Bolivia volvió a ocupar el último lugar en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. No hay recursos suficientes para la prensa independiente, que a menudo es intimidada, y la movilización de la sociedad civil contra la corrupción es la más baja entre los 15 países analizados en el Índice.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Las investigaciones relacionadas con la corrupción contra la oposición y los miembros del gobierno interino de Áñez pueden seguir politizándose.

Aunque el MAS perdió unas elecciones locales de gran importancia en marzo, tiene mayoría en el Congreso y ejerce influencia sobre el poder judicial. Reformas anticorrupción parecen poco probables bajo estas condiciones.

A pesar del continuo sentimiento antigubernamental provocado por la mala gestión de la pandemia, los esfuerzos de la sociedad civil y los medios de comunicación para luchar contra la corrupción pueden tener efectos limitados.



VENEZUELA

15
RANKING

1.40

Puntaje General 2021

1.52

Puntaje General 2020

1.71

Puntaje General 2019

0.73 Capacidad Legal

1.14 Democracia e Instituciones Políticas

4.72 Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Variables por categoría

Capacidad Legal

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción

Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno

Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación

Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de delación premiada

Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

Democracia e Instituciones Políticas

Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas

Procesos legislativos y de gobierno

Calidad general de la democracia

Sociedad Civil y Medios de Comunicación

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras en la educación

Calidad de la prensa y del periodismo de investigación

Comunicaciones digitales y redes sociales

Puntaje media





15
RANKING

VENEZUELA

Venezuela sigue siendo un país atípico en el Índice CCC y ocupa el último lugar por tercer año consecutivo. La puntuación global del país ha descendido un 8% desde 2020, y está más de un punto por detrás de Bolivia, el segundo país con peores resultados. El Índice CCC evalúa el régimen de facto de Nicolás Maduro, no el gobierno interino de jure reconocido por algunos miembros de la comunidad internacional.

La dictadura de Maduro ha tenido un declive constante en su capacidad legal desde 2019, con puntuaciones especialmente bajas en cuanto a la independencia judicial, los organismos anticorrupción e investigadores. No se dispone de información pública fiable, y el gobierno no ha revelado las asignaciones presupuestarias ni las donaciones internacionales para luchar contra la COVID-19. El Estado también ha perseguido a quienes denuncian la falta de transparencia en los datos relacionados con la pandemia, así como las malas condiciones de los hospitales y la escasez de equipo de protección individual.

La puntuación de Venezuela en la categoría de democracia e instituciones políticas cayó un 20%, tras unas elecciones legislativas no competitivas en diciembre de 2020. El PSUV de Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional, y la mayoría de los candidatos de la oposición no participaron.

La única categoría en la que Venezuela no se queda atrás respecto al resto de la región es en el de sociedad civil y medios de comunicación, donde supera a Bolivia. Los medios de comunicación, especialmente las plataformas basadas en la web, y las ONGs han continuado condenando las prácticas corruptas del régimen de Maduro, incluso mientras enfrentan amenazas del gobierno.

TEMAS CRÍTICOS PARA MONITOREAR

Con la pandemia en pleno apogeo y el gobierno desesperado por conseguir una mejora económica en 2021, las prácticas corruptas y la evasión de las sanciones pueden afianzarse todavía más.

Es probable que el gobierno de Biden continúe persiguiendo las violaciones a ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y el lavado de dinero en Venezuela. Sin embargo, es improbable que estas acciones tengan efectos duraderos en el entorno anticorrupción que existe Venezuela.

La oposición se encontrará ante el riesgo de corrupción al tener acceso a los bienes y recursos del Estado que han sido mantenidos fuera del alcance de Maduro y de sus aliados. Cualquier escándalo de corrupción de la oposición podría socavar sus esfuerzos por promover la democracia. Las elecciones regionales previstas para noviembre de 2021 pueden ofrecer una oportunidad para que la oposición ejerza más poder a nivel local, pero hasta el momento de esta publicación no está claro cuáles miembros de la oposición podrán participar en estas elecciones.

METODOLOGÍA

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

El Índice CCC abarca diferentes aspectos del entorno anticorrupción de los países—desde la independencia del poder judicial y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, hasta la calidad de las leyes que rigen los grupos de presión y la financiación de las campañas. La puntuación global del Índice CCC se compone de tres categorías:

- Capacidad legal (I)
- Democracia e instituciones políticas (II); y
- Sociedad civil y medios de comunicación (III).

Estas categorías se dividen a su vez en las siguientes 14 variables:

CAPACIDAD LEGAL

Independencia y eficiencia judicial

Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción

Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno

Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación

Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco

Calidad de los instrumentos de delación premiada

Nivel de cooperación internacional en materia de orden público

DEMOCRACIA E INSTITUCIONES POLÍTICAS

Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas

Procesos legislativos y de gobierno

Calidad general de la democracia

SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Movilización de la sociedad civil contra la corrupción

Mejoras en la educación

Calidad de la prensa y del periodismo de investigación

Comunicaciones digitales y redes sociales

En conjunto, estas 14 variables proporcionan una visión completa y detallada del entorno anticorrupción de los países, es decir, su capacidad para detectar, castigar y disuadir la corrupción. Las 14 variables influyen de manera diferente a la capacidad de los países para combatir la corrupción, por lo cual las variables reciben diferentes ponderaciones en la puntuación para así reflejar esta realidad. Por ejemplo, consideramos que la independencia y la eficiencia judiciales son más decisivas que la libre circulación de información en las redes sociales. En consecuencia, la primera variable tiene una mayor ponderación en la puntuación del Índice CCC.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos introducidos en el modelo del índice proceden de dos fuentes: datos públicos generados o recopilados por instituciones de renombre, y una encuesta realizada por Control Risks y otros expertos en anticorrupción en la región.

LOS DATOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA EL ÍNDICE SE HAN OBTENIDO DE

Basel Institute on Governance
Freedom House
Harvard Electoral Integrity Project
International IDEA
International Budget Partnership
Newzoo Global Mobile Market Report
Reporteros Sin Fronteras
UNESCO
Banco Mundial
Foro Económico Mundial
Proyecto de Justicia Mundial

El índice se basa en los últimos datos disponibles de estas instituciones. Algunos datos del Harvard Electoral Integrity Project, de la UNESCO y del Foro Económico Mundial no fueron actualizados el año pasado. En esos casos, utilizamos los mismos puntos de datos que en el Índice CCC 2020. Por ello, los resultados de la encuesta tuvieron un mayor peso relativo a la hora de determinar los cambios en las puntuaciones de los países para 2021. Las versiones anteriores del Índice CCC utilizaban datos del informe de Freedom House sobre la libertad de prensa; como ese informe ya no se produce, sus datos no se incluyeron en el Índice CCC de 2021. En algunos casos, se han excluido datos específicos del conjunto de datos; por ejemplo, el índice sólo utiliza el factor de Gobierno Abierto en la base de datos del Proyecto de Justicia Mundial y sólo las variables de financiación de campañas en el repositorio del Harvard Electoral Integrity Project.

Además de los datos disponibles públicamente, realizamos una encuesta

basada en hechos con expertos en anticorrupción locales. La encuesta tiene dos objetivos. En primer lugar, complementar los datos disponibles públicamente, que en sí mismos no cubren de forma exhaustiva todos los ámbitos que pretendíamos evaluar. Y en segundo lugar, reunir información más específica y detallada no disponible en el dominio público. El resultado final es una metodología que es un híbrido de datos “duros” y datos de encuesta, lo que garantiza la flexibilidad y precisión necesarias para realizar el análisis.

Como lo hicimos en la edición de 2020, consultamos a tres expertos por país: un analista de Control Risks más dos analistas independientes – comparado a dos expertos en 2019. Con la ventaja de contar con un experto adicional, pudimos rastrear valores atípicos: cuando un experto discrepaba significativamente de los otros dos (por más de dos puntos), invitamos al experto a aclarar el razonamiento detrás de la respuesta proporcionada. Cuando la divergencia continuaba, la respuesta se consideraba un valor atípico y, en consecuencia, se excluía. Esto sólo ocurrió en unos pocos casos.

Con más datos de encuesta, también pudimos realizar mejores comparaciones regionales para detectar anomalías. Por ejemplo, analizamos la correlación entre los datos “duros” y los de la encuesta y llevamos los casos de mayor divergencia a un análisis detallado. Cuando se detectaron incoherencias claras, consultamos a los tres expertos para determinar con precisión la corrección más adecuada, basada en una escala de tres puntos. Sólo en un caso se efectuó una corrección.

La encuesta se realizó entre mediados de marzo y principios de abril y en ella participaron los siguientes expertos: Mauricio Alarcón Salvador (Fundación Ciudadanía y Desarrollo), Fabiano Angélico (Fundação Getúlio Vargas), Miguel Carter (DEMOS- Centro para la Democracia, la Creatividad y la Inclusión Social), Marielos Chang (Universidad del Valle de Guatemala), Mariana Campos (México Evalúa), María Lorena Cummings (MLC & Co.), Camilo A. Enciso Vanegas (Anticorruption Institute), María Laura Escuder (consultora independiente), Benjamín Fernández Bogado (Fundación Libre), Babaji Cruz Peñaló (consultor y experto en licitaciones públicas), Mercedes De Freitas (Transparencia Venezuela), Octavio del Favero (Fundación Ciudadanía Inteligente), Hazel Feigenblatt (Macblatt), María Jaraquemada (abogada), María Paula Garat (Brum Costa Abogados), Paula Henríquez (consultora), Theodore Kahn (Fedesarrollo), Eduardo Mello (Fundação Getúlio Vargas), Gustavo L. Morales Oliver (Marval, O’Farrell Mairal), Valeria Moy (IMCO- Instituto Mexicano para la Competitividad), Carolina Muñoz (According2Law), Alfredo Ortega Franco (Universidad Rafael Landívar), Raúl Peñaranda U. (Brújula Digital), Rafael Piñeiro Rodríguez (Universidad Católica del Uruguay), Denisse Rodriguez-Olivari, (Universidad de Humboldt de Berlín), Juan David Polit (Aguilar Castillo Love), Lindsay Sykes (PPO Abogados), Simeon Tegel (periodista y analista), and Ana Carolina Ureña Adames (LOVILL). Un experto externo pidió que no se le identificara: un alto analista anticorrupción que trabaja en Venezuela. Los analistas de Control Risks que participaron son Gabriel Brasil, Inés Echeagaray, Thomaz Favaro, Raúl Gallegos, Leandro Lima, Claudia Navas, Adriana Thomas, Nicolás Urrutia y Alan Zamayoa.

Los expertos mencionados no están necesariamente de acuerdo con todas las conclusiones y opiniones expresadas en este informe.

LIMITACIONES METODOLÓGICAS

Todos los índices que miden el comportamiento humano son imperfectos, ya que nunca pueden captar todos los elementos de un fenómeno determinado. El Índice CCC es necesariamente una representación parcial basada en el modelo comentado anteriormente, con 14 variables, a partir de datos públicos y privados limitados. El modelo del índice tiene algunas limitaciones, como la subjetividad, el traslape y la endogeneidad (una relación causal entre algunas de las variables). Los cuestionarios enviados a los expertos de cada país fueron lo más fidedignos posible, pero inevitablemente se mantuvo cierto grado de subjetividad. Para reducir la subjetividad, aplicamos un análisis riguroso para comprobar la coherencia de las respuestas y pedimos a los expertos que interpretaran y compararan los datos con las medias regionales. El traslape se relaciona con el hecho de que algunas variables incluyen los mismos elementos: por ejemplo, la puntuación de Freedom House también incluye medidas de independencia judicial. En lo que respecta a la endogeneidad, aunque reconocemos que puede llegar a estar presente en la metodología, no socava la consistencia de los resultados. Se analizaron las mismas variables, utilizando las mismas fuentes de datos, para todos los países, por lo que cualquier endogeneidad afectaría a todos los países en buena medida de la misma manera. Por último pero no menos importante, es imposible analizar todos los elementos que afectan a la capacidad de un país para luchar contra la corrupción. Seleccionamos 14 variables que abarcan una amplia gama de temas y que consideramos que son los elementos clave que conforman el ámbito de la lucha contra la corrupción. Pero es posible que algunos aspectos se hayan dejado de lado. En los casos en que consideramos que esto suponía una limitación, destacamos este factor en el perfil del país.

AGRADECIMIENTOS

El Índice CCC edición 2021 es el trabajo de más de cincuenta personas y les estamos profundamente agradecidos. En AS/COA, Asociada de Policy Emilie Sweigart ayudó a gestionar la ejecución del proyecto y en la redacción del reportaje. Leonie Rauls, Asistente de Investigación, coordinó las respuestas a la encuesta y contribuyó al proceso editorial. El Director Creativo Donald Partyka y el Director Creativo Asociado Nikita Kataev diseñaron el reportaje y las visualizaciones de datos digitales. La Gerenta de Relaciones con Medios Pía Fuentealba ayudó a amplificar el impacto mediático del Índice.

En Control Risks, el Director Thomaz Favaro fue instrumental en la coordinación de las respuestas de los expertos de la organización, y aportó su expertise durante el proceso. Renato Akamine, Gerente, contribuyó sus habilidades de análisis de datos al proyecto. Desarrolló una base de datos robusta para almacenar el gran volumen de datos y llevó a cabo la analítica de estos datos y generación de los puntajes. Kate Rallis, Julia Livick, and Laure le Masson, respectivamente Socia Directora, Gerente Senior de Contenido y Medios, y Gerente de Marketing, colaboraron con el equipo de relaciones con medios de AS/COA para coordinar la cobertura mediática y la organización de eventos.

Categorías

	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Capacidad Legal	4.50	1.53	5.15	5.94	4.53	6.28	4.78	3.75	3.82	4.27	3.69	5.68	4.21	7.59	0.73
Democracia e Instituciones Políticas	5.71	3.99	4.16	7.49	4.70	6.80	4.17	3.12	4.08	4.91	3.95	5.21	4.11	8.19	1.14
Sociedad Civil y Medios de Comunicación	7.04	3.54	6.34	7.24	6.18	6.59	5.76	5.43	6.35	5.11	5.92	6.34	5.57	8.02	4.72

Variables

Capacidad Legal	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Independencia y eficiencia judicial	3.98	1.05	4.78	7.43	5.50	7.13	3.65	3.42	3.63	3.49	3.31	5.42	4.14	8.39	0.41
Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción	3.00	1.00	5.33	6.67	5.00	6.83	5.33	2.83	3.33	4.33	4.33	5.83	3.83	7.50	0.00
Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno	6.07	2.92	6.33	7.05	4.93	5.96	4.51	4.92	6.32	5.00	3.99	6.32	6.24	7.64	1.01
Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación	4.17	0.50	4.33	5.67	2.67	5.67	3.50	2.67	2.00	3.83	3.00	3.67	3.17	7.00	0.67
Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco	4.80	2.57	4.49	5.76	4.86	4.96	5.06	3.62	4.40	4.52	3.44	5.24	4.81	6.20	2.56
Calidad de los instrumentos de delación premiada	7.00	0.67	5.67	4.33	3.33	6.33	5.67	4.67	3.00	4.33	3.67	7.67	3.33	8.33	0.00
Nivel de cooperación internacional en materia de orden público	3.67	3.00	5.67	3.67	5.67	6.67	6.67	5.33	5.33	5.00	4.33	6.67	4.67	8.00	1.00

Democracia e Instituciones Políticas	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas	5.38	3.70	3.32	6.82	4.19	6.70	3.38	3.16	4.78	4.36	3.00	4.87	2.91	6.92	1.50
Procesos legislativos y de gobierno	3.50	1.83	2.17	6.67	3.67	4.67	2.83	1.00	1.00	2.33	2.83	3.83	3.33	8.50	0.33
Calidad general de la democracia	8.40	6.60	7.40	9.30	6.50	9.10	6.70	5.20	6.10	8.30	6.50	7.10	6.70	9.80	1.40

Sociedad Civil y Medios de Comunicación	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Guatemala	México	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela
Mobilización de la sociedad civil contra la corrupción	5.00	1.33	5.33	6.67	4.67	5.00	5.33	4.67	7.00	3.33	5.00	5.67	3.33	7.67	3.33
Mejoras en la educación	8.40	4.72	6.17	7.34	6.33	6.78	5.58	4.84	5.60	6.02	5.18	5.73	5.66	7.16	5.81
Calidad de la prensa y del periodismo de investigación	8.14	4.00	7.88	6.76	7.88	7.87	6.83	6.72	6.68	5.57	6.85	8.04	6.06	8.93	5.96
Comunicaciones digitales y redes sociales	6.63	4.09	5.98	8.20	5.85	6.72	5.31	5.50	6.12	5.53	6.65	5.90	7.21	8.32	3.78